

# Las FARC: fuentes de su longevidad y de la conservación de su cohesión\*

Daniel Pécaut\*\*

## RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo dar cuenta de la longevidad y la cohesión de la principal organización de las guerrillas en Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El texto inicia con un rápido recuento histórico de las FARC y realiza una exposición de fenómenos significativos en las diferentes fases organizativas de este grupo guerrillero. Al final reflexiona sobre las estrategias de guerra, la temporalidad y las relaciones con el entorno político y social colombiano e internacional, que le han permitido a las FARC mantenerse como organización activa durante las últimas cuatro décadas.

*Palabras clave:* guerrilla, Colombia, conflicto, organización.

## THE FARC: SOURCES OF THEIR LONGEVITY AND OF THE CONSERVATION OF THEIR COHESION SUMMARY

This article analyzes the longevity and the cohesion of the principal organization of the guerrilla in Colombia, the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC). The text initiates with a rapid historical inventory of the FARC and realizes a presentation of significant phenomena in the different organizational phases of this guerrilla group. Ultimately, the article thinks about the strategies of war, the temporality and the relations with the political and social Colombian and international environment, environment that allowed to the FARC to continue as active organization during the last four decades.

*Key words:* guerrilla, Colombia, conflict, organization.

FECHA DE RECEPCIÓN: 21/01/2008

FECHA DE APROBACIÓN: 13/02/2008

\* Una versión de este artículo fue publicada en la revista Hérodote No. 123, del cuarto trimestre de 2006, pp. 9-40. Traducción Alberto Valencia Gutiérrez, Profesor, Universidad del Valle, Cali, Colombia.

\*\* Director de estudios en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París.

Este artículo tiene un objetivo limitado y específico: dar cuenta de la longevidad y la cohesión excepcional de la principal organización de las guerrillas en Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La longevidad tiene más de medio siglo. Las FARC se constituyeron oficialmente con este nombre en 1966, pero provienen de las organizaciones de autodefensa que surgieron en los años 1950 y que, a partir de 1964, se presentan como guerrilla revolucionaria, con el nombre de Bloque Sur. La adición en 1982 de dos letras para convertirse en FARC-EP (Ejército Popular) confirma una vez más su voluntad de llegar al poder utilizando el recurso de la vía militar<sup>1</sup>. En 2007 todavía insisten en este proyecto y, con un número de efectivos que desde 1990 oscila entre 10.000 y 17.000 combatientes, han logrado infligir en ciertos momentos reveses espectaculares a la fuerza pública. Ninguna organización guerrillera en el mundo puede ostentar una continuidad de esta naturaleza, si nos atenemos a las que poseen un verdadero poderío militar.

Su cohesión no es menos sorprendente. No se ha presentado ninguna escisión de envergadura en lo que tiene que ver con divergencias políticas o desacuerdos militares<sup>2</sup>. La organización jerárquica se ha mantenido. Su legendario jefe, Manuel Marulanda Vélez, posee desde el principio un ascendiente incontrovertido. La conservación de esta cohesión es aún más sorprendente si tenemos en cuenta que las FARC han extendido de manera permanente su presencia territorial, han multiplicado los frentes locales, han manejado recursos financieros considerables y han recurrido a prácticas de guerra que muchas veces han estado muy próximas del terror y del bandidismo. Todas estas circunstancias hubieran podido favorecer su fragmentación. Pero nada de eso ha ocurrido.

De manera similar las FARC hubieran podido sufrir algún debilitamiento en la medida en que, a pesar de su capacidad militar, nunca han contado con la simpatía política de sectores amplios de la sociedad por fuera de algunas zonas rurales. El fracaso en este aspecto tampoco se ha traducido en rupturas. Desde 1980 solamente dos grupos de alguna significación se separaron colectivamente, pero su aventura rápidamente se malogró<sup>3</sup>. Algunos cuadros subalternos han huido cargando con su «botín» pero se trata de casos excepcionales. Las deserciones individuales ordinarias han existido, pero han sido relativamente raras al menos hasta los últimos tiempos.

La longevidad y la cohesión merecen ser consideradas con mayor atención si tenemos en cuenta que el entorno de esta guerrilla ha sufrido, a su vez, profundas transformaciones. Colombia se ha urbanizado de tal manera que la población urbana sobrepasa ahora el 70% del total y su nivel de educación, aunque muy desigual según las regiones, ha mejorado en términos globales. En las últimas décadas Colombia ha entrado en la era de la globalización con todo lo que esto implica con respecto a las formas de consumo, de comunicación y de información. En el plano internacional la caída del muro de Berlín hubiera podido sembrar dudas sobre la continuación de la lucha armada en una organización que se reclamaba del comunismo de la Unión Soviética; de hecho, varias organizaciones

<sup>1</sup> Conforme a la manera como ellas mismas se llaman habitualmente, casi siempre utilizaré simplemente la sigla FARC, dando por entendido obviamente que en sus comunicados la organización utiliza siempre la sigla completa.

<sup>2</sup> Algunos de los fundadores del EPL y del M-19 pasaron, ciertamente, por las FARC pero no permanecieron mucho tiempo en la organización.

<sup>3</sup> Sin embargo, a comienzos de los años 1980 un grupo apreciable se separó de las FARC, tomó el nombre de «Ricardo Franco» y se estableció en el departamento del Cauca donde reclutó más de 300 combatientes y mantuvo lazos muy estrechos con el M-19. La historia terminó mal: bajo la sospecha de que se habían colado informantes en su organización, sus dos líderes, entre los cuales se encontraba el hermano de uno de los líderes del M-19, ejecutaron a sangre fría a más de 160 miembros. Muchos de ellos eran adolescentes de origen indígena. En la misma época, un pequeño grupo de las FARC, comandado por Bernardo Gutiérrez, se integró en el Urabá a la guerrilla rival del EPL, contribuyendo así a la larga confrontación local entre las dos organizaciones, que se mantuvo incluso después de la desmovilización del EPL en 1991 bajo la forma de masacres recíprocas (A. F. Suarez, 2007). Tratándose de divisiones esto es muy poco durante un período tan largo.

guerrilleras colombianas, en particular el M-19 y el EPL<sup>4</sup> se desmovilizaron; sin embargo, las FARC no pusieron en cuestión la alternativa de la lucha armada y, por el contrario, tomaron la decisión de darle un nuevo impulso.

Centrado en un aspecto limitado, este artículo se ha construido alrededor de una problemática igualmente limitada, ya que se refiere sobre todo a las estrategias organizativas de las FARC. Por estrategias organizativas entiendo las lógicas de acción que éstas ponen en práctica con base en los «recursos» que logran adquirir por diversos medios. Estos recursos pueden ser tanto de orden económico como de orden social o político e incluyen sentimientos como la confianza, el resentimiento o las lealtades políticas. Sin embargo, su conformación es inseparable de la utilización de la violencia, independientemente de que ésta se ejerza sobre sectores de la población «civil», de que contribuya a definir las reglas disciplinarias que se aplican a los combatientes o de que presida la formación de una visión «amigo enemigo» que sirva de soporte a las representaciones políticas. Los «recursos» y las «lógicas de acción» son inseparables. Los recursos son meramente potenciales cuando no están puestos al servicio de acciones militares o políticas. La utilización del término «recursos» no implica una adhesión a las teorías clásicas de la acción colectiva en términos de «movilización de recursos»; por el contrario, la utilizo de forma más laxa siguiendo la descripción que lleva a cabo C.W. Anderson de la manera como en los sistemas políticos que tienen una débil legitimidad, como ocurrió en América Central en los años 1960, algunos grupos pueden acceder al estatus de actores políticos y participar en la repartición del poder gracias a la movilización de recursos heteróclitos, tradicionales y modernos, entre los cuales se encuentra la violencia<sup>5</sup>. F. Escalante Grijalbo ha mostrado la fecundidad de una perspectiva de este tipo en el caso de México<sup>6</sup>. Pero, en el caso colombiano, los recursos no son utilizados solamente para aumentar la capacidad de influir de los actores en un sistema de competencia, sino que se inscriben en un campo de conflicto armado en el que la violencia no es un ingrediente entre otros, sino el ingrediente principal, y es asumido como tal.

[24]

Una vez admitida esta problemática, la pregunta inicial se convierte en la siguiente: ¿de qué manera las estrategias organizativas han contribuido a la longevidad y a la cohesión de las FARC? La respuesta no es simple y podría consistir en la simple descripción de la rigidez de su organización burocrática<sup>7</sup>. Al comienzo, al menos, el funcionamiento de las FARC fue poco burocrático y no es fácil de comprender la manera como posteriormente, un grupo altamente burocratizado, ha logrado tener algún grado de eficacia para afrontar la infinita diversidad de situaciones locales y adaptarse a unas relaciones de fuerza cambiantes<sup>8</sup>.

Hay que considerar más bien la manera como, sin perder la cohesión, la organización puede recurrir, según las circunstancias y los lugares, a una diversidad de lógicas de acción basadas en una multiplicidad de recursos. Todos los recursos no son activados al mismo tiempo y de la misma manera en todas las zonas en las que hacen presencia; cuando algunos fallan otros lo sustituyen. Recursos como la confianza política e, incluso, la intimidación, son más susceptibles de desgastarse que el control de las riquezas regionales; si las FARC sólo hubieran contado con los primeros, hubieran corrido

<sup>4</sup> El M-19 (nombre dado como referencia al 19 de abril de 1970, fecha de las elecciones presidenciales en las que se supone que el general Rojas Pinilla, el antiguo «dictador», perdió debido a fraudes de última hora) nunca intentó formular un cuerpo doctrinal preciso. La operación trágica de la toma del Palacio de Justicia en 1985 contribuyó a su abandono de la lucha armada. El EPL se reclamaba del maoísmo y, más en particular, de su versión albanesa.

<sup>5</sup> ANDERSON Charles W., *Politics and Economic Change in Latin America, Tge Governing of Restless Nations*, Princeton, D. Van Nostrand Company, 1967

<sup>6</sup> ESCALANTE Grijalbo Fernando, *Ciudadanos imaginarios*, México, El Colegio de México, 1992.

<sup>7</sup> Cf FERRO Medina J.G. et Uribe R, *El orden de la guerra. Las FARC-EP: entre la organización y la política*, CEJA, Bogotá, 2002.

<sup>8</sup> Es cierto que a los comandantes de los frentes les gusta jugar también a los burócratas. Tienen en sus computadores una lista cuidada de los miembros del frente, con fecha de nacimiento, inventario de los castigos (causas y modalidades, por ejemplo, una guerrillera condenada a cavar 4 m de una fosa por haberse demorado mucho tiempo en satisfacer sus necesidades), etc. «Sonia», capturada y extraditada los Estados Unidos, como responsable de las finanzas de un frente en el Caquetá, mantenía una contabilidad rigurosa. El decomiso de los computadores ofrece de esta manera informaciones preciosas.

el riesgo de fragmentarse al cabo de muy poco tiempo. A fortiori, esto habría ocurrido si únicamente se hubieran apoyado sobre su capacidad de hacer reconocer, por amplias fracciones de la población, su aspiración a «tomar el poder» o, incluso, solamente de convertirse en un actor político creíble: su reconocimiento siempre ha sido muy precario, pero nunca había caído tan bajo como en los últimos tiempos.

Además la idea de estrategia organizativa no implica que las FARC obren según los criterios de una racionalidad preestablecida e inmutable. La adopción de lógicas múltiples de acción no implica necesariamente que éstas siempre converjan; la racionalidad que ponen en práctica es muchas veces limitada, con mayor razón en el momento en que se ven confrontadas en un campo de relaciones de fuerza inestable y conformado por actores heteróclitos. Cuando es posible, adoptan respuestas adaptadas a las intervenciones de las fuerzas armadas, pero pueden igualmente, y con no menos facilidad, hacer frente a las bandas juveniles urbanas, a las redes de narcotraficantes y, con mayor dificultad, a las organizaciones paramilitares, que se inspiran en los métodos de la guerrilla pero haciendo uso de una crueldad mucho mayor.

En un campo marcado por una complejidad de esta naturaleza, la división «amigo-enemigo» tiende muy a menudo a perder su nitidez. Las colusiones entre los protagonistas alternan con los antagonismos. Los efectos de resonancia entre los diversos fenómenos de violencia están siempre presentes. Los elementos litigiosos tienden a modificarse en función de las circunstancias. Los efectos no previstos son permanentes.

Si a pesar de todo las FARC logran mantener un elevado nivel de cohesión, eso se debe finalmente sobre todo a dos factores: un fundamento de sociabilidad compartida y la primacía dada a la acción militar sobre la acción política. El fundamento de sociabilidad, vinculado en parte a la historia de la ocupación de la regiones de colonización y a la memoria real y mítica de los episodios de violencia anteriores, se encuentra en la base de lo que yo llamo un ethos “campesinista”. La primacía de la acción militar permite eludir los debates políticos internos, fuente habitual de las divisiones. Estas son las dos tesis que subtienden el conjunto del análisis. Los límites del análisis no son menos evidentes.

El propósito de este ensayo no es de manera alguna ofrecer una historia de las FARC. Otros autores se han empeñado en construirla y me remito a ellos. Presentaré, ciertamente, en un momento preliminar, un rápido recuento histórico; pero, en el resto del texto, no llevaré a cabo una periodización sistemática; por el contrario, haré una exposición «temática» en la cual haré referencia de manera deliberada a fenómenos significativos en diferentes fases.

Además, no se tendrán en cuenta los “programas”, las “declaraciones” o los “comunicados” de las FARC; sólo ocasionalmente haré mención a la sucesión de los “plenums” o de los “congresos”. El lector podrá sentirse asombrado por esto pero la omisión es voluntaria, ya que considero que estos textos tienen una importancia menor. Como lo mencionaré más adelante, las FARC nunca han brillado por su inventiva teórica. El hecho de pregonar su ambición de “tomar el poder” les permite poner siempre de presente su finalidad política, pero eso no equivale a la definición de una estrategia política o de un programa de gobierno. Por el contrario, son sus prácticas y sus acciones las que tienen un sentido político.

Finalmente, la limitación más evidente de este análisis es que deja de lado casi siempre los demás actores armados y sus estrategias. Es evidente, obviamente, que las acciones de las FARC sólo son inteligibles si se los tiene en cuenta, ya que éstas reaccionan tanto como actúan: su repliegue territorial relativo desde el año 2000, frente a los avances de los paramilitares y de las Fuerzas Armadas, lo pone de presente. Los recursos de acción se modifican correlativamente. Sólo considero a los demás protagonistas bajo el prisma de su impacto sobre las FARC. Mi intención no ha sido hacer un estudio de conjunto del conflicto colombiano sino responder a la doble pregunta planteada al principio relacionada con las estrategias organizativas de esta guerrilla.

## 1. ALGUNAS OBSERVACIONES GENERALES

Los conflictos que han sacudido a Colombia desde los años 1930 son de tipos muy diversos. Algunos pueden ser descifrados claramente como conflictos sociales, como es el caso de numerosos conflictos agrarios de los años 1930 o, más adelante, de los años 1960. Algunos de éstos presentan también una dimensión étnica ya que son las poblaciones indígenas las que han cargado con el costo de la expansión de la gran propiedad. Los conflictos de trabajo asociados a la industrialización también están presentes. Otros conflictos conllevan un ingrediente religioso, como es el caso de aquellos que están vinculados al lugar de la Iglesia Católica en las instituciones, o un ingrediente regional, como son los provocados por la repartición de los recursos y de los poderes locales. Casi todos tienen claramente una dimensión política en la medida en que se relacionan con la rivalidad entre los dos partidos políticos formados en el siglo XIX; en este caso, entonces, se comprometen las identidades políticas colectivas y pueden desembocar en guerras civiles regionales o nacionales, como fue el caso en los años 1933-1934 en los departamentos de Santander y Boyaca y, sobre todo, en los años 1946-1960, cuando se presenta el episodio de la *Violencia* que dio como resultado no menos de 200.000 muertos. Es evidente que estas diversas dimensiones se combinan a menudo sobre todo en el caso de la *Violencia* en la que, más allá del antagonismo político, intervienen intereses económicos de diversos sectores sociales.

De una manera aparentemente paradójica estos diversos conflictos, incluyendo los conflictos que son fundamentalmente políticos, se han desarrollado en el marco de un régimen político que se ha reclamado de manera continua de una legitimidad democrática<sup>9</sup>. Ciertamente, esta última remite menos a una concepción compartida de las instituciones que a la existencia de una pluralidad de fuentes de poder en el dominio económico y político. El «liberalismo», del que se reclaman numerosos sectores, hace referencia no tanto a una convicción política como al simple hecho de la pluralidad y de la competencia en la que ésta se manifiesta. Por lo demás, las reglas democráticas han sido burladas de manera frecuente y amplia a través del recurso a la fuerza, la adopción de dispositivos de excepción o un clientelismo que se hace pasar por ciudadanía. Pero ningún sistema autoritario ha logrado consolidarse, el civilismo se ha impuesto de manera permanente y los militares, relegados casi siempre a funciones de policía, no han sido autorizados para intervenir abiertamente en los debates políticos. La posibilidades de las expresiones políticas diversificadas raramente han sido bloqueadas.

La multiplicidad y la intensidad de los conflictos se deben sobre todo al hecho de que la unidad nacional nunca se ha consolidado plenamente y de que el Estado central sólo ha dispuesto de una autoridad precaria y, en cualquier caso, no ha tenido el monopolio de la violencia. La fragmentación geográfica del territorio, cruzado por las tres cordilleras de los Andes, la multiplicidad de los polos urbanos, el movimiento permanente de ocupación de nuevas zonas de frontera, han contribuido a esta situación. Por consiguiente, los fenómenos de violencia revisten casi siempre una connotación societal, en la cual sin duda el Estado ha estado implicado, bien sea porque las fracciones políticas en el poder los favorezcan, o bien sea porque las carencias de regulación estatal faciliten su surgimiento. Pero estos fenómenos no alcanzarían tal magnitud si amplios sectores de la población no encontraran en ellos el medio de acceder o de aumentar su poder y si la disputa por la repartición del poder no se refractara en una diversidad de confrontaciones locales<sup>10</sup>.

Desde 1977-1978, los fenómenos de violencia han alcanzado un nivel comparable al de la *Violencia* de los años 1950. Masacres, homicidios, desapariciones, secuestros se han generalizado. Para el año 2006, el número de los desplazados se ha estimado en dos o tres millones. Las FARC son uno de los protagonistas más antiguos de esta situación, aunque lejos están de ser los únicos, ni tampoco los más importantes.

<sup>9</sup> Las dos únicas excepciones se remontan a los años de la *Violencia*: en 1952 Laureano Gómez quiso crear un régimen corporativista; en 1953, el General Rojas Pinilla llegó al poder a través un golpe de Estado.

<sup>10</sup> PÉCAUT Daniel, *L'ordre et la Violence, Evolution sociopolitique de la Colombie entre 1930 et 1953*, Paris, Editions de l'EHESS, 1987.

A diferencia de la *Violencia*, el conflicto no se puede descifrar como una “guerra civil” de carácter global<sup>11</sup>. Las FARC, ciertamente, han tratado de imponer una lectura de este tipo al poner el énfasis en una división «amigo-enemigo» entre el «régimen» y las fuerzas insurreccionales, pero esta lectura sólo es compartida por sectores minoritarios. Es verdad también que, desde 1994, los grupos paramilitares se han mostrado decididos a exterminar a la guerrilla y a todos aquéllos que consideran como sus simpatizantes y han creado en algunas regiones una situación de guerra civil. Unos y otros producen fragmentos de un discurso de justificación pero con una pretensión ideológica muy precaria que no permite el establecimiento de creencias o de representaciones colectivas. De hecho, la gran mayoría de la población no se identifica con ninguno de estos dos protagonistas fuera de la ley; aunque debe adaptarse localmente a su presencia, trata sobre todo de mantenerse al margen del conflicto. Éste afecta sobre todo a regiones periféricas: los habitantes de las grandes ciudades sólo perciben su impacto a través de los secuestros, las extorsiones o los atentados más o menos específicos.

El conflicto actual difícilmente se puede definir a partir de una división social, religiosa, étnica o regional. Los paramilitares se han beneficiado sin lugar a dudas del apoyo de los propietarios, de los comerciantes y de los líderes políticos regionales; han contado también con el apoyo de los narcotraficantes y la tolerancia de muchos militares, pero están lejos de contar con la simpatía de la totalidad de las élites «establecidas». Los combatientes de base de los dos campos se diferencian muy poco por su origen social. La religión no tiene influencia sobre la afiliación a cualquiera de los dos campos. Las poblaciones indígenas han estado atrapados entre dos fuegos e intentan sobre todo sustraerse al conflicto. Aunque en algunas regiones los grupos armados antagonistas han tenido bases relativamente consolidadas, esta situación no es generalizada y, desde hace diez años, las fronteras han cambiado con bastante frecuencia y muchas de las regiones han caído bajo el dominio de los adversarios.

De todas maneras, la complejidad y la fluidez del campo de conflicto son de tal naturaleza que es imposible limitarse a la representación de una división de conjunto. La influencia de los narcotraficantes es suficiente por sí misma para enturbiar los esquemas demasiado simples; como protagonistas de primera magnitud, mantienen intercambios con todos los demás protagonistas armados, paramilitares y guerrillas, al igual que con las bandas juveniles urbanas y la delincuencia ordinaria. La complejidad y la fluidez del campo de conflicto se deben en buena medida al lugar central que ocupan, a pesar de que no son directamente actores políticos.

Las FARC han elaborado un relato fundador que se ha convertido en una especie de vulgata en Colombia. Según este relato, su nacimiento es una respuesta al ataque lanzado en 1964 contra Marquetalia, una de las zonas de autodefensa campesinas constituidas bajo la égida del Partido Comunista.

La implantación del Partido Comunista en algunos medios campesinos se remonta en realidad a los años 1930. La organización de formas de autodefensa con armamento rudimentario, por lo demás, es una herencia de los años de la *Violencia*. El traumatismo provocado por este conflicto fratricida y el sentimiento de humillación experimentado por los sectores populares que se vieron arrastrados por las élites, constituyen el verdadero trasfondo de la permanencia de los grupos de autodefensa, a lo cual hay que agregar su frustración frente al hecho de que estas mismas élites aprovecharon la situación para destruir las organizaciones sociales, entre ellas los sindicatos urbanos, y reforzar las redes clientelistas que sirvieron de fundamento a la repartición del poder entre los dos partidos tradicionales durante el Frente nacional. Desde el momento en que la *Violencia* se termina, las clases populares

<sup>11</sup> Los indicadores utilizados en ciertos trabajos internacionales para caracterizar las situaciones de guerra civil, por ejemplo mil personas asesinadas en enfrentamientos armados, no me parecen siempre convincentes. Conflictos armados o insurrecciones cuyos protagonistas no logran que amplios sectores de la población admitan que obedecen a una división «amigo-enemigo» y obliguen a la población a someterse a ella, no constituye necesariamente una guerra civil, incluso, si se prolonga en el tiempo. Cuando además protagonistas no explícitamente políticos, como los narcotraficantes en el caso de Colombia juegan un papel esencial, la asimilación de las estrategias de violencia a una guerra civil es aún más cuestionable. Los fenómenos mafiosos responden a otras categorías.

constatan que no existe una verdadera reforma que haya reducido las desigualdades en la repartición de la tierra y que las estructuras sociales siguen siendo regidas por la ley del más fuerte<sup>12</sup>.

El ataque del Ejército contra Marquetalia se inscribe en el horizonte de la guerra fría y, por lo demás, fue llevado a cabo con el apoyo de aviadores norteamericanos. La campaña política que condujo a este ataque fue orquestada por el sector más reaccionario del Frente Nacional en nombre de la necesidad de terminar con lo que se denominaba «repúblicas independientes» comunistas. Sin embargo, desde antes de esta fecha, en 1961, el Partido Comunista había adoptado como línea la «combinación de todas las formas de lucha», a través de la cual pretendía preconizar el recurso a la lucha armada. Esta línea en realidad hacía referencia al mantenimiento de los núcleos de autodefensa campesina que provenían de la Violencia. En 1964 se crea un «Bloque Sur» de guerrilla. Dos años más tarde, y siempre bajo la égida del Partido Comunista, se produce el nacimiento oficial de las FARC, como una forma de reagrupamiento de los núcleos de autodefensa<sup>13</sup>.

En el momento de su nacimiento las FARC presentan reivindicaciones de reforma agraria que no tienen nada de revolucionario; se trata sobre todo de permitir el acceso a la tierra de aquellos que no la poseen, no tanto a través de una redistribución de la propiedad existente sino de la ayuda para la colonización de nuevas tierras.

A la salida de su período de proscripción el Partido Comunista, modelo de ortodoxia de la línea Moscú, se sitúa en las antípodas del radicalismo ideológico que se apodera en 1960 de una buena parte de la juventud estudiantil. No son las FARC sino otras organizaciones guerrilleras las que asumen las consecuencias de esta radicalización: el ELN (Ejército de Liberación Nacional) con su inspiración guevarista y la influencia de la teología de la liberación<sup>14</sup>; el EPL (Ejército Popular de Liberación) con su orientación maoísta; y, un poco más tarde, el M-19 con su estilo *tupamaro* y posteriormente con su vinculación a una estrategia fundamentalmente militar. En gran medida, estas organizaciones surgen como reacción a lo que consideran como el «reformismo» del Partido Comunista y de las FARC, que estigmatizan con el calificativo de orientación “mamerta”.

[28]

La «combinación de todas las formas de lucha» no remite a un proyecto de toma del poder por las armas. De conformidad con los viejos esquemas comunistas, los dirigentes del Partido Comunista sólo ven en los campesinos una fuerza complementaria: la revolución les parece impensable por fuera del desarrollo de una poderosa clase obrera, que depende del desarrollo de las fuerzas productivas. Mientras tanto, se limitan a pregonar en alta voz su antiimperialismo y, para colmar su espera, se dedican a participar en las elecciones a las asambleas locales, estableciendo alianzas con fracciones del Partido Liberal. A las acusaciones de «reformismo» de las que son objeto por parte de las demás organizaciones revolucionarias, las FARC replican con la denuncia del «aventurerismo pequeño burgués» de estas últimas.

Durante largo tiempo todas las organizaciones armadas formadas en los años 1960 permanecen en la periferia. Sus acciones esporádicas y más o menos improvisadas sólo preocupan de manera excepcional a los gobernantes y las instituciones políticas centrales permanecen por fuera de su alcance. Hacia 1975, las guerrillas están al borde del fracaso. El ELN, que había pasado por una fase de autodestrucción en nombre de la pureza ideológica<sup>15</sup>, fue prácticamente destruido en 1973 después de una operación desafortunada, hasta el punto de que sólo le quedaron 40 combatientes. El EPL

<sup>12</sup> SÁNCHEZ G y Meertens, D. *Bandoleros, gamonales y campesinos, el caso de la violencia en Colombia*, Bogotá, El Ancora, 2e éd, 1994.

<sup>13</sup> PIZARRO Leóngomez, E, *Las FARC (1949-1966): De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha*, Bogotá, 1991.

<sup>14</sup> El ELN se ha beneficiado del prestigio de Camilo Torres, el cura que fue eliminado por el ejército en 1966, tres meses después de haberse vinculado a la guerrilla. Otros curas han combatido en particular en los rangos del ELN, entre ellos varios de origen español. Uno de ellos, Manuel Pérez, fue el principal jefe de esta organización en los años 1980-1990.

<sup>15</sup> Durante la fase en la que Fabio Vázquez dirigió la organización, muchos de los principales cuadros fueron ejecutados como consecuencia de juicios expeditos. Manuel Pérez, el cura español que dirigió la organización a partir de los años 1980, escapó por suerte de un tal destino.

no había logrado ganar terreno debido a un dogmatismo que lo aislaba de la población rural. Las FARC estaban estancadas: en 1967 sufrieron un revés del que tuvieron dificultades en reponerse<sup>16</sup> y sólo pudieron reagrupar 700 u 800 combatientes, de hecho combatientes de dedicación parcial y que disponían de un armamento muy rudimentario, adquirido gracias al ataque a los puestos de policía. En 1975 consideran incluso la posibilidad de su desmovilización<sup>17</sup>. El M-19, por su parte, se encontraba aún en su fase de gestación. En síntesis, el destino de las guerrillas colombianas no parecía ser muy diferente al de las demás guerrillas latinoamericanas, con la diferencia de que no habían tenido que enfrentar una dictadura.

A comienzos de los años 1980, el panorama se transforma bruscamente: los efectivos y la presencia territorial de todas las organizaciones de guerrilla, incluyendo el ELN, conocen una expansión rápida. Estas organizaciones emprenden operaciones de envergadura. El M-19 da el ejemplo a este respecto con el enfrentamiento del ejército en acciones ambiciosas que tienen eco nacional. Las FARC se transforman igualmente: durante su 7ª «conferencia», realizada en 1982 deciden doblar el número de sus frentes y esbozan un plan para llegar al poder en ocho años. Para simbolizar su nueva voluntad ofensiva agregan a su sigla, como ya se ha dicho, las letras EP (Ejército Popular). Se pone fin con ello a las tácticas de autodefensa y a las escaramuzas fugaces contra los puestos de policía. Sin cambiar de nombre, las cuatro principales organizaciones guerrilleras se convierten en organizaciones de un calibre completamente diferente.

Las organizaciones guerrilleras logran captar, a partir de ese momento, recursos financieros considerables, que provienen en un primer momento de los «recaudos» operados sobre diversas actividades económicas. A este respecto, cada organización tiene su especialidad: la economía petrolera en el caso del ELN, la producción y la exportación de banano en el caso del EPL, la coca en el caso de las FARC. Todas ellas practican la extorsión donde pueden hacerlo, al igual que los secuestros, cuyo número crece cada vez más a partir de 1980, hasta alcanzar la cifra de casi 3000 por año a comienzos de los años 2000. Menos «especializado», el M-19 recurre también a los secuestros y a las extorsiones y recibe en algún momento contribuciones de los narcotraficantes. Todas las organizaciones armadas acceden de esta manera al mercado internacional de las armas.

La situación política que se presenta en Colombia entre 1977 y 1982 favorece la expansión de las guerrillas. Inclinado a ver en todas partes la amenaza de la «subversión», el gobierno de Julio César Turbay adopta dispositivos de excepción extremos, reprime brutalmente todos los movimientos contestatarios y aprueba la utilización de la tortura contra todos los que militan en ellos o, de manera más simple, contra los defensores de los derechos humanos. Al hacer esto, favorece el desarrollo de una oposición radical, una parte importante de la cual alimenta en ese momento una gran simpatía con las organizaciones armadas, principalmente el M-19. La coyuntura centroamericana, caracterizada por las guerras de El Salvador, Nicaragua y Guatemala, hace que las guerrillas colombianas se sientan un componente fundamental de una vasta lucha revolucionaria.

El panorama nacional e internacional se modifica sin embargo, una vez más, a finales de los años 1980. El cese al fuego pactado en 1984 por Belisario Betancur con las organizaciones de guerrilla, salvo el ELN, dura muy poco, pero conduce a diversos sectores de la izquierda a tomar distancia de la lucha armada. Las aperturas que el régimen colombiano presenta desde 1984 y la conmoción de la opinión frente al terrorismo sin precedentes puesto en práctica por una parte de los narcotraficantes, desemboca en la convocatoria de una Asamblea Constituyente en 1990. Esta asamblea elabora en 1991 una nueva Carta fundamental que, entre otras disposiciones, garantiza mucho mejor la protección de las libertades individuales y promueve el reconocimiento de los derechos de las minorías étnicas.

<sup>16</sup> Las FARC perdieron la parte más importante de su armamento y su segundo comandante fue eliminado.

<sup>17</sup> Según el testimonio del ministro de Gobierno de la época las FARC enviaron una carta en este sentido al Presidente Alfonso López Michelsen. Los generales, convencidos de que las FARC estaban al borde de la extinción, disuadieron al Presidente de aceptarla.

culturales. La caída del muro de Berlín en 1989 y el estancamiento de los conflictos de América Central conmocionan a su vez los esquemas intelectuales de la izquierda. Las guerrillas no pueden escapar a la formulación de un interrogante sobre la continuación de su lucha. El M-19, luego el EPL y otras organizaciones<sup>18</sup>, entre ellas una fracción del ELN, deciden desmovilizarse. Únicamente las FARC y el ELN continúan en la guerra. A las antiguas justificaciones de su acción estas dos organizaciones agregan ahora la denuncia del giro neoliberal tomado por el gobierno a partir de 1990.

Sin embargo estos grupos descubren rápidamente que no tienen que luchar solamente contra las fuerzas armadas y las instituciones del Estado, sino que también se tienen que enfrentar con un adversario menos visible: los grupos paramilitares. Estos últimos, ciertamente, no habían esperado hasta 1990 para entrar en acción. En asociación con los narcotraficantes, desde 1985 habían golpeado uno a uno a los militantes de izquierda y a los defensores de los derechos humanos y habían logrado, como veremos más adelante, exterminar a gran parte de los miembros de una formación política, la Unión Patriótica, que las FARC y el Partido Comunista habían creado en 1985. Estos grupos son igualmente responsables, solos o con los narcotraficantes, del asesinato de líderes políticos de primer plano, entre ellos tres de los candidatos presidenciales de 1990: el liberal Luis Carlos Galán, gran favorito, el líder de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo, y el dirigente desmovilizado del M-19, Carlos Pizarro. En muchos de estos asesinatos, los narcotraficantes y los paramilitares contaron con la colaboración de miembros de las fuerzas del orden y de algunos políticos.

Una gran parte de lo que ha sido denominado «guerra sucia» se desarrolló en las ciudades. La novedad, a partir de 1994, es que los grupos paramilitares, siempre mezclados con los narcotraficantes, incluso cada vez más organizados y financiados por estos últimos, intentan retomar los territorios en los que las FARC y el ELN se habían implantado. En 1997, estos grupos dispersos crean una especie de coordinación con la constitución de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y disponen de diversas ventajas con relación a las guerrillas: la financiación garantizada directamente por los narcotraficantes; la tolerancia de amplios sectores de las fuerzas del orden, cuando no su apoyo directo; la solidaridad de los políticos y de los propietarios regionales; su adaptación a los diversos escenarios locales.

Mientras tanto, la economía de la droga había hecho posible la emergencia de todo tipo de bandas armadas: los sicarios a sueldo de los narcotraficantes, las bandas de barrio, las mafias vinculadas al mundo político; y había propiciado una corrupción que corroía casi todas las instituciones.

Desde entonces, las FARC y el ELN se encuentran inmersos en un campo conflictivo complejo, fluido, fragmentado y heterogéneo. La dimensión política de este campo ya no está asociada solamente a una relación con las instituciones, sino que se replica igualmente en la división social.

## 2. LA EXPANSIÓN GEOGRÁFICA DE LAS FARC

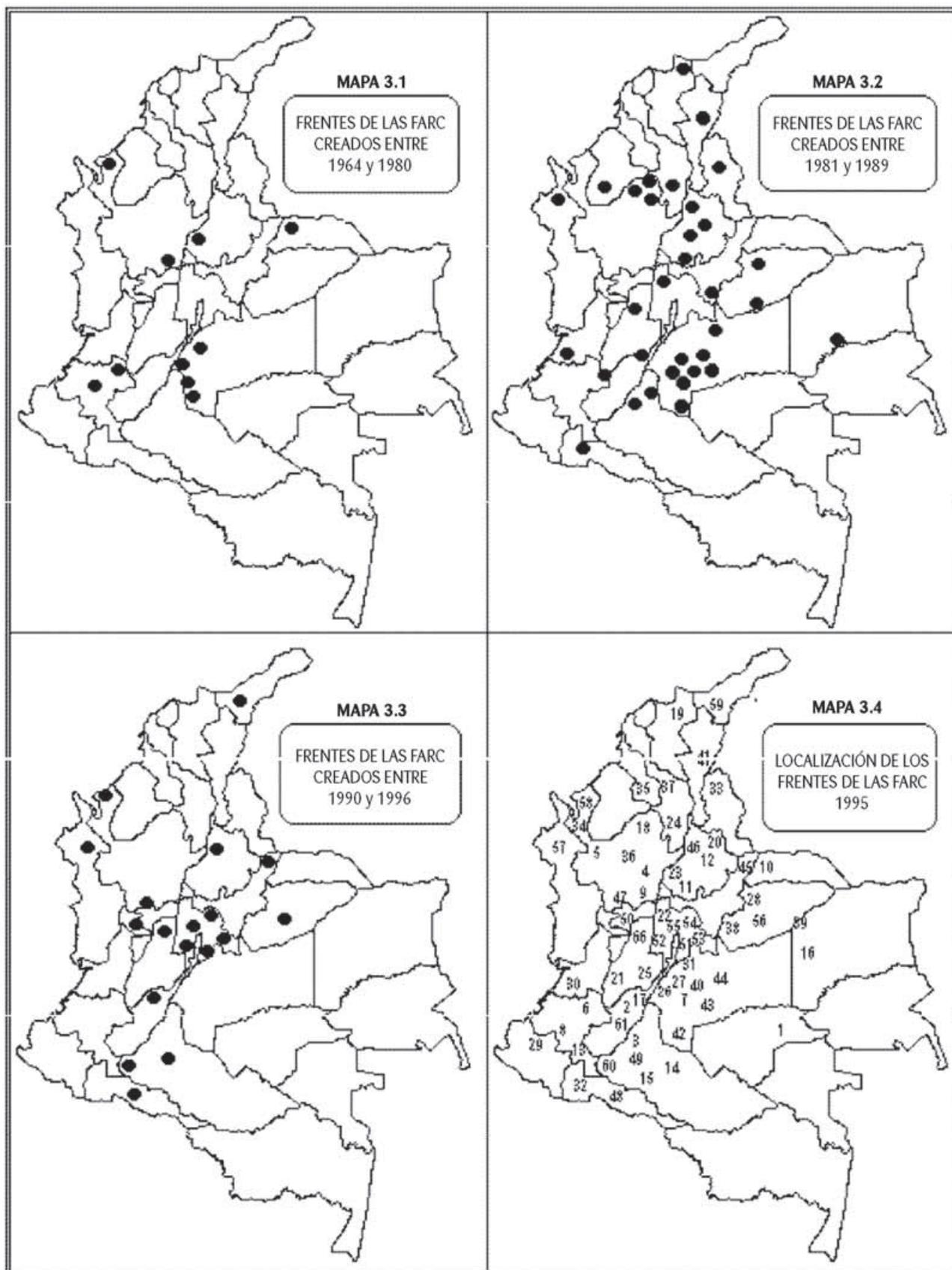
La decisión de las FARC en 1982 de multiplicar el número de sus «frentes» y de sus combatientes se cumple poco a poco sobre el terreno. De 15 frentes en 1982, las FARC pasan a 40 en 1990 y a más de 60 en 2000. De 2000 en 1982, sus efectivos pasan a 8000 en 1990 y a 17.000 en 2000.

El resultado de esto es que su implantación desborda rápidamente sus zonas de presencia tradicional para afectar una gran parte del territorio como se puede observar en los mapas que aparecen a continuación<sup>19</sup>:

<sup>18</sup> Entre estas organizaciones se encuentran el «Frente Quintín Lame», creado por las poblaciones indígenas para afirmar su autonomía, y algunas guerrillas menores.

<sup>19</sup> Estos mapas y los gráficos son tomados de los trabajos realizados por Camilo Echandía en el marco del Observatorio para la Paz de la Presidencia de la República. Le doy las gracias, una vez más, por la generosidad con la que ofrece acceso a estos datos.

### Intensidad de las actividades e implantación de los frentes



Una expansión de esta naturaleza hace vano el intento de seguir buscando correlaciones entre tipos de estructura agraria y zonas de operación de las FARC. Sin duda, estas últimas siguen ejerciendo un dominio relativamente estable en las regiones de colonización del sur del país, como Caquetá. Pero las regiones de colonización se diversifican a medida que nuevos polos de producción económica atraen flujos de inmigrantes, es decir, las «condiciones objetivas» cuentan cada vez más y los cálculos estratégicos se vuelven determinantes, como múltiples trabajos lo han ampliamente señalado<sup>20</sup>.

Estos cálculos estratégicos se orientan en particular a garantizar para las FARC el control de seis objetivos:

1. La Cordillera oriental de los Andes es el objetivo que ha estado en el primer plano desde el comienzo de los años 1980, ya que permite controlar el paso entre el departamento del Meta, con presencia tradicional de la guerrilla, y los alrededores de Bogotá.

2. Los polos de acumulación económica. Sobre este punto volveremos más adelante a propósito de los recursos financieros de las FARC.

3. Los corredores de comunicación destinados a vincular los bastiones de las FARC con la ruta de importación de armas y de salida de la droga. Los más importantes de estos corredores son los siguientes: a) hasta mediados de los años 1990 el que va a Urabá, desemboca en el Atlántico y, después de que Urabá cae bajo el dominio de los paramilitares, el que va hacia Chocó con salida a los dos océanos; b) el valle del Magdalena Medio constituye otro corredor tradicional; c) el que va desde Caquetá y Huila hacia la costa pacífica pasando por Cauca y Nariño. La zona de Nariño, Cauca y Valle, comprendida en Buenaventura y Tumaco, ha adquirido últimamente un valor estratégico cada vez más grande.

4. La zona de frontera terrestre. La frontera con Venezuela reviste un particular interés, lo que explica la aspereza del conflicto en la serranía de Perijá, en el noroeste, en la región de Tibú en Santander del Norte y en el conjunto del departamento de Arauca. Durante los últimos años, la frontera con el Ecuador, que sirve a la vez de zona de refugio y de ruta de acceso al Pacífico, se ha convertido también en el teatro de numerosos enfrentamientos.

5. Los alrededores de las metrópolis y de ciertas ciudades secundarias. Entre 1993 y 2003, el objetivo de la «conquista del poder» se traduce principalmente en un intento por rodear a Bogotá, Medellín y Cali.

6. Las zonas en crisis económica y social como por ejemplo la región de cultivo del café, celebrada en otra época como modelo de una región de pequeños y medianos campesinos relativamente prósperos, conoce una fase de descomposición social como consecuencia de la baja de los precios y presenta unos niveles de violencia que se encuentran entre los más altos de Colombia.

En 2002, la actividad de las FARC se ha seguido concentrando en las zonas de cultivo de coca, las fronteras terrestres y los corredores que conducen hacia los océanos. Estas zonas han sido objeto de disputa desde 1997 por los paramilitares. Los departamentos de Antioquia y Arauca son teatros fundamentales de las operaciones de los grupos ilegales. Cauca, Nariño, Meta, y Chocó se han convertido también, en los últimos años, en corredores o polos del cultivo de la coca. No hay motivo para asombrarse al constatar que estas zonas son aquéllas en las que los homicidios son más numerosos, teniendo en cuenta obviamente que se siguen presentando sobre todo en los centros urbanos.

Entre las organizaciones guerrilleras las FARC han sido siempre, de lejos, las responsables de la mayor cantidad de las acciones armadas, salvo a finales de los años ochenta cuando el ELN ocupó el primer rango. En algunas coyunturas, su propósito no ha sido solamente continuar o preservar su implantación territorial sino responder globalmente a las iniciativas militares del gobierno. Además de una tendencia constante al crecimiento de sus acciones a partir de 1985 y su multiplicación en el mo-

[32]

<sup>20</sup> ECHANDIA Castilla, C, *El conflicto armado y las manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia*, 2 vol, Observatorio de Violencia, Bogotá, 1999. RANGEL Suarez, A, *Colombia: guerra en fin de siglo*, Bogotá, Tercer Mundo, 1998. SALAZAR, B y Castillo, Maria del Pilar, *La hora de los dinosaurios, Conflicto y depredación en Colombia*, Cali, CEREC-CIDSE, 2001.

mento de los cambios de gobierno, también ha evidenciado un incremento inusitado en 1990-1991 después de la ocupación por el ejército de la sede del Secretariado en La Uribe y de nuevo en 1993-1994 después de que el gobierno Gaviria lanzó la consigna de «guerra integral» contra las guerrillas. Al multiplicar las acciones en todo el país, las FARC obligan a las fuerzas armadas a dispersarse. De 1995 a 1998 logran infligir reveses espectaculares a varias unidades militares de élite.

### 3. LOS RECURSOS SOCIALES: LAS LÓGICAS DE ENCUADRAMIENTO DE LA POBLACIÓN

Una manera clásica de explicar la expansión de una organización armada consiste en evocar el apoyo que obtiene de ciertas franjas de la población, la capacidad de asumir sus reivindicaciones, de canalizar su movilización, de dar forma a sus experiencias y a su memoria, de ofrecer un cuadro de interpretación para sus sentimientos de injusticia y de proponer vías para remediarlos.

Para que las FARC hubieran podido reclutar cerca de 17.000 combatientes, fue necesario que dispusieran de sólidos anclajes sociales.

Durante los años 1960-1970, las FARC sin lugar a dudas estuvieron directamente vinculadas con sectores rurales de las antiguas y nuevas zonas de colonización. Algunos de estos sectores habían estado inmersos, desde los años 1930, en la sociabilidad engendrada por las redes comunistas y los sindicatos campesinos alrededor del problema de la tierra y casi todos conocieron posteriormente la experiencia de la *Violencia*<sup>21</sup>.

Expulsados por la fuerza o por la miseria, ansiosos de sustraerse a la dominación de los grandes propietarios, obligados algunas veces a desplazarse como consecuencia de las operaciones militares de represión, estos colonos habían logrado apoderarse de zonas periféricas, ampliamente sustraídas al control del Estado<sup>22</sup>. Desde comienzos de los años 1960, algunos de estos desplazamientos habían sido asimilados por las organizaciones campesinas armadas vinculadas con el Partido Comunista. Algunos autores han hablado a este respecto de «colonización armada»<sup>23</sup>. Aunque el fenómeno de colonización desborda ampliamente esta migración controlada, una situación de relativa ósmosis entre la población y la guerrilla se impuso en numerosas zonas de implantación<sup>24</sup>.

Los rasgos de aquella época subsisten; no faltan regiones donde existen varias generaciones sucesivas que han vivido identificándose con las FARC, se han adherido a sus concepciones de la injusticia y la justicia y les han suministrado militantes. Frente a la ausencia de instituciones legales, la guerrilla les aporta igualmente, de manera muy simple, un principio de orden social local: impone regulaciones colectivas, arregla los litigios interindividuales, garantiza una cierta estabilidad a los propietarios de tierra a pesar de la carencia frecuente de títulos de propiedad. Esta actitud se acentúa cuando comienzan a difundirse los cultivos de coca, que atraen migrantes en número cada vez mayor. La atmósfera es, al principio, como la de un *Far West* y las cifras de los homicidios se disparan; las reglas impuestas por la guerrilla son por consiguiente bien acogidas. Tal es la situación que se ha mantenido durante largo tiempo en una gran parte de Caquetá y de Guaviare. Esta zona ha servido siempre en una buena medida de retaguardia de las FARC.

Pero surgen igualmente otras periferias, que atraen a su vez olas de inmigrantes. Varios cientos de miles de campesinos pobres se instalaron en la parte antioqueña de Urabá donde esperaban sacar provecho de las bonanzas de las plantaciones bananeras o, incluso, en el valle del Magdalena Medio. Los flujos se dirigieron después hacia zonas diversas donde se desarrollan actividades económicas: agricultura comercial, carbón, petróleo y, a partir de 1980, cultivos de coca. El perfil de estos emigrantes es mucho más heterogéneo que el de los colonos de 1960: si bien los de origen rural son siempre

<sup>21</sup> MARULANDA Vélez, M, *Cuadernos de campaña*, Bogotá, Abejón Mono, 1973.

<sup>22</sup> GONZÁLEZ Arias, J.J, y Marulanda Álvarez, E, *El estigma de las repúblicas independientes, 1955-1965*, Bogotá, CINEP, 1998.

<sup>23</sup> RAMIREZ Tobón, W, «Guerrilla rural en Colombia: una vía a la colonización armada?» en Estado, *Violencia y Democracia*, Bogotá, 1990.

<sup>24</sup> MOLANO, A, *Siguiendo el corte, Relatos de guerra y tierras*, Bogotá, El Ancora, 1987.

mayoritarios también hay otros que vienen del mundo urbano, atraídos por la esperanza de encontrar empleo e ingreso. En particular las zonas de cultivo de coca alimentan a menudo las olas de los recién llegados con la ilusión de un enriquecimiento rápido y surgen allí los *raspachines* o recolectores de hojas de coca, una especie de sub-proletariado heteróclito.

La guerrilla se encuentra, pues, frente a situaciones que no son las mismas del proceso de colonización de 1960. Los nuevos colonos ya no están a la búsqueda de tierras sino de medios para sobrevivir. Sin duda, las ilusiones de los inmigrantes duran muy poco. Estos polos de producción económica, fugaces o no, se caracterizan por una carencia de servicios públicos, desigualdades flagrantes y un nivel muy elevado de violencia, incluso política.

Cuando se trata de actividades económicas legales, estas circunstancias favorecen la formación de poderosas organizaciones sindicales en las que las guerrillas se logran infiltrar hasta tomar incluso algunas veces su control. De esta manera en las plantaciones bananeras de Urabá surgieron entre 1985 y 1991 dos sindicatos, uno vinculado a las FARC, el otro al EPL, que lograron una transformación profunda de las condiciones de trabajo<sup>25</sup> pero que rápidamente fueron instrumentalizados por las dos guerrillas que se dejaron arrastrar por una guerra sin cuartel durante cerca de una década. En el enclave petrolero de Barrancabermeja, el movimiento sindical disponía de una larga tradición de combatividad pero las FARC y el ELN se empeñaron en disputarse su hegemonía y terminaron por llevarlo a un conflicto sin salida.

En otros lugares, donde el campesinado clásico había sufrido las consecuencias de la expansión de la gran propiedad y en la zona de colonización donde se había impuesto la economía ilegal, se han producido esporádicamente fuertes movilizaciones, promovidas e impulsadas igualmente por las guerrillas. Este fue el caso de las marchas masivas de 1987-1988 y, más aún, de las inmensas protestas de 1995-1996 contra las primeras campañas de destrucción de cultivos de coca por aspersión aérea. Se puede hablar a este propósito, ya no de ósmosis entre la población y las guerrillas, sino de una confluencia provisional frente a problemas precisos. Una confluencia que sigue siendo frágil y se deshace rápidamente en el momento en que se encuentra con la recrudescencia de todas las formas de violencia contra los que protestan: la violencia de la guerrilla que busca aumentar su dominio sobre las organizaciones sociales aún al riesgo de provocar su dislocación; la violencia de la fuerza pública que pone en práctica una represión a menudo ciega; la violencia de los paramilitares y de otras fuerzas oscuras que no dudan en exterminar a los militantes.

La guerrilla puede, ciertamente, organizar una lógica de «protección» que descansa sobre la imposición de una restricción a cambio de ciertos beneficios. Los cultivadores de coca difícilmente pueden prescindir de esta protección. Sin embargo esta protección corresponde muy poco al modelo analizado por Diego Gambetta a propósito de la mafia italiana<sup>26</sup>: opera en un clima de guerra en el cual la muerte puede ser la sanción del desacuerdo y no ofrece la posibilidad ni de «*voice*» ni de «*exit*» según los términos de Hirschman. Aunque los habitantes valoran a menudo el hecho de que la guerrilla administre la justicia, algunos testimonios recientes permiten establecer que la manera como ésta es administrada puede suscitar también un sentimiento de injusticia y que, cuando se trata de «justicia penal», el recurso expedito a la pena de muerte es percibido más bien como una imposición del miedo, con el mismo título que las medidas expeditas en otros dominios<sup>27</sup>.

La lógica de la protección es aún más incierta en otras regiones que están bajo la influencia de la guerrilla; en aquellas donde la economía gira alrededor de la explotación del petróleo o de la extracción de los minerales, otros grupos, legales e ilegales, están igualmente presentes para contrarrestar la

<sup>25</sup> La competencia entre las dos guerrillas se convierte en una verdadera guerra de 1985 a 1990, con centenares de muertos.

<sup>26</sup> GAMBETTA, D, *The Sicilian Mafia, The Business of Private Protection*, Cambridge Mass, 1993.

<sup>27</sup> Un libro de la periodista Juanita León (2005) que trata, de hecho, sobre el período contemporáneo, invita a no idealizar estas regulaciones y este sistema de justicia. Según los testimonios que ella ha recogido, las FARC habrían realizado un examen de VIH a toda la población del municipio de Vistahermosa y habrían ejecutado a todos aquellos que resultaron positivos.

influencia de la guerrilla. La situación no es muy diferente en las regiones de agricultura comercial. Atrapada entre dos fuegos, la población sabe que no puede contar con ninguna protección estable. La guerrilla sólo se logra imponer gracias a la utilización de medidas de intimidación, incluso de terror, a las que responden las de sus adversarios. Más que de «protección», se trata del encerramiento en una situación hobbesiana en la cual la supervivencia implica la renuncia a cualquier margen de libertad, pero en provecho de un soberano que puede de un momento a otro ser desplazado por un soberano rival.

La coerción que ejercen las FARC aparece así claramente cuando, por objetivos coyunturales, se desencadenan «paros armados» que consisten en bloquear durante varios días, o incluso varias semanas, el transporte y el aprovisionamiento de una zona. Arauca, Putumayo, Caquetá han sido en diversos momentos teatro de las operaciones: la población local sufre sus efectos y sólo le queda inclinarse ante el poder de las armas.

De la misma manera que desconfían de cualquier tipo de manifestación autónoma de la población y hacen lo necesario para canalizarla en su provecho, las FARC tampoco se adaptan bien a fenómenos independientes de construcción idéntitaria, como lo muestra su comportamiento con respecto a las poblaciones indígenas del Cauca. Desde hace treinta años, estas poblaciones indígenas han luchado por recuperar sus derechos sobre vastas tierras indebidamente apropiadas por grandes propietarios y por la Iglesia Católica y por afirmar, cada vez más, su especificidad cultural, la cual ha sido ampliamente reconocida por la constitución de 1991. Esto no solamente las ha expuesto a las violencias de los latifundistas sino también a la de los frentes de las FARC, implantados en su región, que han perpetrado en su contra asesinatos selectivos e, incluso, masacres. Las organizaciones indígenas se han visto obligadas de esta manera a desarrollar diferentes modos de resistencia frente a las FARC, al igual que frente al Ejército y a hacer frente a los paramilitares. La misma dificultad de las FARC por avalar las afirmaciones idéntitarias se manifiesta ahora con respecto a las poblaciones afrocolombianas de Chocó y Nariño, cuyos derechos colectivos sobre los territorios también fueron reconocidos en 1991. Las FARC se establecieron en esos territorios y multiplicaron en ellos las masacres<sup>28</sup>. Estas zonas se cuentan ahora entre las más expuestas a las matanzas y a los desplazamientos masivos de los habitantes porque son también apetecidas por los paramilitares, en la medida en que comprenden rutas esenciales para el tráfico de la droga y de las armas.

No es excepcional tampoco que las FARC, en las zonas que controlan, cometan exacciones que terminan por provocar la reacción de los habitantes. Esto es lo que ocurre desde el comienzo de los años 1980 en la zona de Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio: en las elecciones locales los habitantes dieron la mayoría al Partido Comunista pero la multiplicación de los secuestros y la extorsión indiscriminada, incluso contra los menos favorecidos, terminaron por incitar a la población a volverse hacia uno de los primeros núcleos paramilitares. La zona es desde entonces uno de los bastiones de estos últimos.

Ni el término de «protección» ni el de «coerción» son suficientes, pues, para describir las relaciones de las FARC con la población. En muchos casos, se trata simplemente de dominación por el miedo. Durante los últimos tiempos, para contrarrestar la implantación creciente de los paramilitares en su feudo de las zonas amazónicas de cultivo de coca, las FARC han impulsado censos de los habitantes y sólo han autorizado la permanencia de aquellos cuya fidelidad les parece garantizada, eliminando los sospechosos<sup>29</sup>.

Es cierto que la lógica de la protección, incluso la de la coerción, no funciona desde el momento en que la organización ya no tiene el monopolio local. Ahora bien, desde finales de los años 1990 el

<sup>28</sup> Uno de ellos hace parte de los anales del horror. Se trata de la masacre ocurrida el 2 de mayo de 2002 en la vereda de Bojayá, disputada entre los paramilitares y las FARC. Las FARC bombardearon la Iglesia donde se habían refugiado los habitantes, matando 119 personas entre las cuales se contaban 45 niños.

<sup>29</sup> Cf R. VARGAS Meza, 2003.

hecho preponderante es más bien la empresa de reconquista de numerosas regiones, lanzada por los paramilitares. La competencia entre organizaciones armadas no implica solamente el crecimiento de las prácticas de violencia, sino que crea una incertidumbre que incita a la población a adoptar estrategias de retirada, de supervivencia o de fuga. Esto ocurre de manera mucho más clara cuando la población constata que antiguos guerrilleros figuran en los rangos de los paramilitares y les sirven de informantes. Los casos son menos numerosos en las FARC, pero son frecuentes entre los antiguos militantes del EPL y el ELN. Incluso donde estos desplazamientos no se han producido, el rumor es suficiente para minar las eventuales relaciones de confianza con una guerrilla bastante disminuida.

En síntesis, hay que matizar la visión según la cual el encuadramiento de la población por las FARC se beneficiaría de un apoyo estable en las zonas de colonización. Incluso cuando se mantiene, el apoyo puede tener diferentes grados, de la cuasi ósmosis hasta la obediencia coercitiva. Hay que considerar también el desgaste que ocurre con el tiempo y que se traduce, por ejemplo, en una repugnancia creciente de los habitantes de las zonas bajo dominio de las FARC, con respecto a consignas como las de los paros armados o las del boicot de las elecciones.

Existe una realidad incontrovertible: las FARC conservan hasta el momento su perfil de guerrilla, si no «campesina», porque el calificativo le conviene más acertadamente a una población rural diversificada, sí de guerrilla «campesinista», es decir, que se reclama sobre todo de una población rural que ha permanecido al margen de la modernización y que recluta en ese vasto vivero la gran mayoría de sus combatientes.

Si damos crédito a un estudio reciente<sup>30</sup>, el 90% de los combatientes de las FARC provienen de allí, incluyendo a aquellos cada vez más numerosos, que se han socializado en veredas o en pequeños pueblos. La miseria, la tradición militante, la atracción de las armas, el gusto por la disciplina, las desavenencias con la familia y, de manera más sencilla, la socialización y el encuadramiento por las FARC, son todos factores que contribuyen a la vinculación a la lucha armada. Su nivel de educación es a menudo débil, incluso próximo al analfabetismo.

[36]

Los propios comandantes y cuadros de las FARC provienen ampliamente de ese mismo universo social. Manuel Marulanda es evidentemente la mejor ilustración y su aura proviene en parte de su «estilo campesino», que él cuidadosamente pone en escena. El Secretariado, instancia superior de las FARC, comprendía en 2007 otros seis miembros: el «Mono Jojoy» no tiene formación escolar y no parece haber salido jamás del mundo rural; algunos de ellos hicieron estudios superiores en Colombia (Alfonso Cano, Iván Márquez e Iván Ríos); otros, como Timoleón Jiménez, hicieron cursos en la Unión Soviética pero, por la fuerza de las circunstancias, su experiencia urbana posterior se ha limitado al contacto con poblaciones secundarias y, sólo de manera ocasional, con ciudades importantes. Aunque su carrera como militante se ha desarrollado en Caquetá, Raúl Reyes es el único que posee una gran experiencia de contactos internacionales, dada su función de vocero de las FARC.

Según el estudio citado arriba, la mitad de los 25 miembros actuales del estado mayor se clasifican a sí mismos como rurales. Un porcentaje importante de ellos no terminó la escuela primaria y su formación se llevó a cabo sobre todo en las escuelas de cuadros de las FARC.

Esta homogeneidad social se encuentra en la base del mantenimiento del «ethos campesinista» y contribuye a explicar la cohesión de la organización. La antigüedad de los miembros del Secretariado -la mayor parte de ellos se encuentran en la cumbre de la jerarquía desde hace dos décadas- y de muchos de los miembros del Estado Mayor, no protege solamente contra las posibilidades de infiltración sino contra las disensiones y garantiza también una fuerte autoridad sobre los combatientes de base.

<sup>30</sup> La mayor parte de los datos sobre la composición social de las FARC son tomados de J.G. Ferro Medina y G. Uribe Ramón, 2002. En la medida en que los autores se basan en las declaraciones de los cuadros de las FARC, los datos sólo pueden ser aproximados. Al menos dan una indicación de la imagen que las FARC quieren dar de sí mismas.

Las FARC se diferencian en esto de las otras guerrillas. Sobre todo en sus comienzos, el ELN, el EPL y el M-19 reclutaron una parte importante de sus cuadros entre los estudiantes de las universidades públicas y los medios urbanos radicalizados. Estas organizaciones estuvieron así expuestas a las controversias dogmáticas y a las divisiones. Las FARC, por su parte, han desconfiado siempre de los «pequeño-burgueses» impacientes y les han impuesto unas pruebas que los desaniman con mucha frecuencia.

El ethos campesinista de las FARC ha tenido sin duda que reorientarse en función de las mutaciones relativas del mundo rural y de esta manera la separación con respecto al mundo urbano se ha atenuado. Las consecuencias de la economía de la droga también tienen su parte. Pero la crisis de la propiedad campesina en realidad no ha hecho más que agravarse: concentración de las mejores tierras en manos de los narcotraficantes, delicuescencia de la economía del café, impasses del proceso de colonización a pesar de la coca o a causa de ella. El vivero de las organizaciones armadas no se ha pues agotado.

Sin embargo, también en este aspecto, es necesario matizar la constatación. El reclutamiento de nuevos combatientes se ha vuelto cada vez más difícil. Mientras se mantuvo la zona de distensión, muchos jóvenes se incorporaron con la convicción de que las FARC iban a llegar pronto al poder. Después de la ruptura de las negociaciones y de la ofensiva paramilitar y militar, los aspirantes se volvieron menos numerosos. El porcentaje de los menores en las tropas es cada vez más considerable. No faltan los casos en los que la guerrilla recurre al reclutamiento forzado, bien sea ejerciendo presiones sobre las familias, bien sea estableciendo una coacción sobre los jóvenes adolescentes para que se integren. La moral de los combatientes está lejos de ser siempre estable<sup>31</sup> y las deserciones se hacen cada vez más frecuentes a pesar de los riesgos que corren. Sobre todo desde el momento en que las FARC se han visto confinadas a la defensiva y su descrédito político se ha acentuado.

«Ethos campesinista» o no, las FARC no ignoran que combaten en un país en el que la inmensa mayoría de la población se ha concentrado en las ciudades.

#### 4. LOS RECURSOS FINANCIEROS: LAS LÓGICAS DE ACUMULACIÓN DE PODER

No es suficiente con que algunos grupos sociales garanticen el sostenimiento, voluntario o involuntario, de una organización de lucha armada para que ésta se desarrolle y logre llegar a desafiar militarmente al Estado; es necesario, además, que disponga de recursos financieros para alcanzar una capacidad militar significativa. Ahora bien, las FARC nunca han dispuesto de una ayuda material externa. En 1975, como hemos visto, están estancadas y aún conservan su perfil inicial de autodefensas. El gran cambio que permite el desbordamiento de sus efectivos y la expansión territorial está ligado al hecho de que sus recursos financieros conocen un aumento brutal a comienzos de los años 1980.

Los trabajos de Paul Collier<sup>32</sup> y de otros economistas del Banco Mundial sobre los conflictos locales actuales han difundido, como se sabe, la idea de que la mayor parte de estos conflictos no responden a «reivindicaciones» sino a oportunidades de «predación». Para Collier, estas oportunidades son particularmente fuertes cuando se trata de economías que dependen de la exportación de materias primas y, más aún, de materias primas que pueden fácilmente circular como contrabando. De allí resulta, según el autor, que los grupos armados contestatarios, incluso si mantienen una retórica revolucionaria, tienden a abandonar sus objetivos políticos.

¿Es pertinente este razonamiento en el caso de las FARC? Sus nuevos recursos financieros provienen sobre todo de tres fuentes: la práctica sistemática del secuestro, los recaudos de todo tipo sobre las actividades económicas y la participación en la economía de la droga. Los secuestros no tienen nada que ver con la economía de exportación, los recaudos, algunas veces, pero no es lo más frecuente; la economía de la droga, completamente. Estas finanzas alteran la imagen política que las FARC quieren presentar e implican un olvido de los objetivos revolucionarios.

<sup>31</sup> El Ejército recientemente recuperó el diario personal de una joven holandesa que se había vinculado a las FARC hace algunos años. La lasitud y el desaliento se expresan claramente allí.

<sup>32</sup> COLLIER, P, «Economic causes of civil conflict and their implications for policy», Banque Mondiale, 15 junio de 2000.

Según algunas estimaciones, en 1995 el secuestro representaba un 30% de los recursos de la guerrilla. En 2003, según un informe del Ministerio de Defensa, el porcentaje se ha reducido a una cifra entre el 8 y el 10%. Esta práctica no data de 1980 pero durante un largo período fue excepcional. La situación se modifica a comienzos de los años 1980. Hasta su desmovilización, el M-19 y el EPL llevaron a cabo numerosos secuestros. El ELN hizo del secuestro uno de sus medios habituales y, más aún, a partir de 1990, no ha vacilado en realizar secuestros colectivos: dos ejemplos célebres son la retención de los pasajeros de un avión de la compañía Avianca que había sido desviado de la ruta y la retención de los asistentes a una misa celebrada en Cali. Sin embargo, son las FARC las que llevan a cabo el mayor número de secuestros planeados y las que asumen, a finales de los años 1990, la práctica de las «pescas milagrosas» que consisten en secuestrar al azar en retenes instalados en las carreteras. Para los secuestros en las ciudades recurren a menudo al servicio de sus milicianos o de la delincuencia común, incluso «compran» a esta última las «presas» más importantes. Entre 1998 y 2003, el total de secuestros anuales sobrepasó en algunos momentos el número de 2000 teniendo en cuenta que no todos son llevados a conocimiento de la policía. En 2001-2002, cuando se produce el fracaso de las negociaciones con el gobierno Pastrana, el secuestro se hace patente y las FARC inventan una nueva categoría de víctimas, los secuestrados «políticos». Las guerrillas eufemizan esta práctica al calificarlos como «retenciones». Aunque los narcotraficantes y los paramilitares recurren algunas veces al secuestro, sobre todo a finales de los años 1990, son sobre todo las guerrillas las que lo convierten en una rutina.

El costo de esta práctica es el descrédito político creciente de las FARC y del ELN. El hecho de que las FARC se financien con una actividad que está reconocida como crimen de guerra es, sin lugar a dudas, un símbolo de la degradación de la guerrilla. En cada proceso de negociación la renuncia a esta práctica es una de las condiciones previas formulada por los voceros del gobierno o de la sociedad civil, y los dirigentes de la guerrilla se comprometen a no recurrir más a ella, pero la retoman de manera inmediata. La popularidad del gobierno de Uribe proviene en parte de que su política de «seguridad democrática» se ha traducido en una reducción considerable de los secuestros cuyo número, si damos fe a los datos oficiales, habría caído a menos de 700 en 2007. Pero el «stock» de secuestrados alcanza casi siempre varios centenares.

Esta práctica ha sido un medio de presión en el plano regional: el crecimiento de los secuestros es el preludio de sus operaciones de avance territorial; su menor intensidad actual es el signo de su repliegue relativo tanto militar como político.

Las prácticas de extorsión y de chantaje representan, según el Ministerio de Defensa, el 40% restante de los recursos financieros de las FARC. A este propósito sólo haré algunas rápidas observaciones. Estas prácticas no provienen de los años recientes y han hecho parte muy a menudo de la lógica de «protección», sobre todo en las zonas de ganadería y de agricultura comercial, y recaen igualmente sobre los comerciantes y transportadores. También aquí las FARC recurren a eufemismos al hablar de «tributos» o de «impuestos». En el cenit de su poder, en el año 2000, como si ya ejercieran un doble poder, promulgaron incluso una «ley», la ley 002, que pretendía generalizar esta «imposición» a todos los que detentaran un cierto capital. En las regiones de explotación minera, donde habían adquirido una gran influencia sobre las instituciones políticas locales, no se limitaban a «imponer impuestos» a las empresas sino que se apropiaban de un porcentaje de los contratos públicos, de los cuales se han servido muchas veces para conformar una clientela a imagen de los partidos tradicionales. Los paramilitares han seguido su ejemplo.

La participación en la economía de la droga constituye ahora la mayor parte de la financiación de las FARC. Los estimativos a este respecto son también tan inciertos como los que se hacen de las otras fuentes<sup>33</sup>; pero es indudable que en los últimos años puede significar entre el 50% y el 70%.

<sup>33</sup> En 2003, según un artículo de la revista *Semana* aparecido en 2005, la economía de la droga les habría reportado \$ 11.000 millones de dólares. Estas cifras se construyen, aparentemente, con base en extrapolaciones discutibles y son muy exageradas.

La economía de la droga se ha desarrollado en Colombia desde finales de los años 1970. El territorio colombiano servía en un principio de relevo en la ruta de la coca que provenía de Perú y Bolivia, acogía los laboratorios y constituía el punto de partida de la ruta de exportación hacia los Estados Unidos. Los cultivos se implantaron de manera progresiva y hacia 1994 Colombia ya se había convertido, de lejos, en el primer país productor de coca: en 2002, la superficie cultivada se estimaba en 169.000 ha. De manera accesoria, Colombia también ha dado lugar para que se desarrollen los cultivos de amapola. Durante largo tiempo cultivos y laboratorios se instalaron en zonas controladas por las FARC: aunque estas últimas no eran siempre los iniciadores, si ofrecían en todo caso a los colonos una protección contra las incursiones de las fuerzas armadas.

Las FARC pretendieron en un principio beneficiarse sólo del porcentaje -el «gramaje»- que exigían de los cultivadores como contrapartida por la protección que les ofrecían, no solamente frente a la fuerza pública, sino también frente a los traficantes ya que el desempeño de un rol de intermediarios les permitía contener sus abusos en la fijación del precio de compra y obligar a los colonos a mantener una porción de los cultivos dedicada a productos alimenticios. De hecho las FARC obtenían su financiación de las contribuciones que les entregaban los traficantes como contrapartida por la implantación de laboratorios, pistas clandestinas y rutas de exportación. No ha sido propiamente un resultado de la casualidad que su dominio se haya ampliado desde las zonas amazónicas hasta las regiones fronterizas con Venezuela, Ecuador y Brasil. En los últimos años, las FARC han creado sus propios laboratorios -los “cristalizaderos” les proporcionan ingresos muy superiores a los del “gramaje”-, tienen algunas redes para sacar la cocaína, cobran peajes a las organizaciones de narcotraficantes y negocian con ellas el precio de compra del producto.

Se trata en este caso de recaudos hechos a una economía de exportación. Sin embargo, no es probable que se pueda hablar de actividades de predación: las FARC se encuentran ampliamente presentes en el punto de origen de la producción. No es evidente, tampoco, que esta financiación, al menos al principio, haya desdibujado los objetivos políticos; en todo caso si es claro que ha permitido a la guerrilla afianzar de manera más sólida su dominio territorial sobre la regiones de cultivo, beneficiarse de la red de importación de armas y multiplicar en otros lugares los nuevos frentes, en el marco de una estrategia militar de conquista de múltiples regiones.

La acumulación de recursos financieros a partir de estos tres orígenes, y las prácticas que ésta implica, hacen más sorprendente el mantenimiento de la cohesión de las FARC. Se hubiera podido imaginar que esto se traduciría de hecho, siguiendo el razonamiento de Paul Collier, en la conversión de los guerrilleros al bandidismo y de sus líderes en señores de la guerra. Y, sin lugar a dudas, no han faltado en ciertos momentos guerrilleros de base que lucen collares como cualquier narcotraficante, ni cuadros que se apropian de los pagos de los rescates o que huyen con un botín; pero estos casos han sido relativamente excepcionales. Desde 1985, el Secretariado de las FARC se ha preocupado por centralizar la gestión de los ingresos y por redistribuir parte de ellos a los frentes más pobres. No se puede afirmar, de manera general, que los jefes locales hayan adoptado el estilo de los narcotraficantes, aunque sí parece que ocurre con mayor frecuencia entre algunos comandantes del Boloque Oriental, el que maneja gran parte de la economía de la droga. Además, la desigualdad entre frentes ricos y frentes pobres se ha agudizado recientemente.

Sin embargo la participación de las FARC en la economía de la droga ha tenido un efecto de mayor envergadura, como es el hecho de enturbiar las líneas de conflicto.

La economía de la droga supone transacciones permanentes con los narcotraficantes que compran la coca y controlan la ruta de exportación. Estas transacciones se producen de manera relativamente rutinaria. Durante años, los narcotraficantes han encargado a los “comisionistas” la tarea de negociar con las guerrillas las condiciones de compra de sus productos. La difusión de los grupos paramilitares vinculados con los traficantes no ha puesto fin completamente a estas transacciones. Desde 2004 las FARC, los paramilitares y los narcotraficantes se reparten de común acuerdo las desembocaduras en la Costa Pacífica de los ríos del departamento de Nariño. Numerosas son igualmente las zonas donde

las guerrillas vigilan la producción en las partes rurales de los municipios y la entregan a los paramilitares instalados en los centros urbanos de esos mismos municipios. Testigos de estas transacciones, las poblaciones locales, tienen buenas razones para alimentar dudas sobre el carácter político del enfrentamiento.

Sin embargo, estas transacciones ocasionan también enfrentamientos sangrientos desde los años 1980. Uno de estos enfrentamientos, por lo demás, contribuyó hacia 1986 a la formación del primer grupo paramilitar de envergadura, organizado por Gonzalo Rodríguez Gacha, un aliado del cartel de Medellín, responsable de innumerables asesinatos políticos<sup>34</sup>. Una década más tarde, los litigios tomaron la forma de una guerra sin cuartel: el enfrentamiento entre los paramilitares y las FARC tuvo como origen el control de las zonas de cultivo de coca. Esta guerra, marcada por masacres y desplazamientos masivos de los habitantes, compromete toda la zona donde se encuentran los cultivos ilegales más extensos en el departamento de Meta, Guaviare, Santander del Norte, Putumayo y Nariño.

La mezcla de transacciones y de guerra sin cuartel muestra que la economía de la droga enturbia efectivamente la relación «amigo-enemigo». Las FARC se han convertido en uno de los mayores protagonistas de la economía de la droga. La detención en abril de 2001 de «Fernandinho», uno de los barones brasileños de la droga, en una región controlada por las FARC, es una prueba de ello. Uno de los frentes de las FARC, el Frente 16, instalado en esa región y comandado por el «negro Acacio» (muerto en septiembre de 2007) ha servido de plataforma para el tráfico de droga. Por lo demás, a medida que los paramilitares ganan terreno, la guerrilla tiende cada vez más a organizar sus propias redes de narcotráfico<sup>35</sup>.

La implicación de las FARC en la economía de la droga va de la mano con que sienten cada vez menos la necesidad de obtener el consentimiento de la población. La acumulación de recursos financieros es lo que garantiza su autonomía como organización militar.

[40]

## 5. LOS RECURSOS DE VIOLENCIA: LAS LÓGICAS DE ACCIÓN MILITAR

Casi desde su nacimiento las FARC han afirmado que su objetivo es poner fin al sistema del Frente Nacional y acceder al poder; pero para lograrlo han pensado sobre todo en la movilización de las clases populares. El acceso a importantes fuentes de financiación las ha conducido progresivamente a dar prioridad a una estrategia militar.

El programa de 1982-1983, que preveía la toma del poder en ocho años<sup>36</sup>, es su primera manifestación. En 1991, la fuerte respuesta a la ocupación por el Ejército de Casa Verde, la sede de su dirección, constituye una segunda manifestación. Pero las conclusiones de la Conferencia de las FARC en 1993 no dan lugar a dudas. Las FARC ponen el acento en el reagrupamiento de los frentes en «bloques regionales» (cuya dirección recae en manos de varios de los miembros del Secretariado), la formación de «columnas móviles», la realización de ataques locales masivos y, sobre todo, las operaciones para tomarse las ciudades. La ofensiva que sigue de 1995 a 1998 demuestra que efectivamente habían alcanzado la capacidad militar de amenazar el poder.

Todos los elementos están presentes para llevar a cabo la demostración. Durante cuatro años multiplican las operaciones orientadas a concentrar varios centenares, incluso un millar de combatientes; atacan con éxito las bases militares; logran desarticular batallones de élite y se toman momentáneamente ciudades secundarias; obligan a la policía a retirarse de numerosas localidades y destruyen sus instalaciones a menudo con las casas de los alrededores; capturan más de quinientos militares y policías. De la guerra de guerrillas, las FARC pasaron a una guerra de movimientos. Las fuerzas armadas, por su parte, estaban desconcertadas. Obligadas a dispersarse para hacer frente a numerosas operaciones se veían en dificultades para contener la ofensiva.

<sup>34</sup> Al principio él habría obrado por venganza contra las FARC, que le habrían robado un cargamento de cocaína.

<sup>35</sup> VARGAS Meza, R., *Narcotráfico, guerra y política antidrogas*, Bogotá, Acción Andina, 2005.

<sup>36</sup> ARENAS, J., *Cese el fuego, Una historia política de las FARC*, Bogotá, Editorial La Oveja Negra, 1985.

El momento que las FARC escogieron para lanzar esta ofensiva no se debe a una casualidad, ya que estaban sacando provecho plenamente de los ingresos asociados al incremento de los cultivos de coca. En cambio, las instituciones políticas comenzaron a tambalearse. Cuestionado por la contribución del cartel de Cali a su campaña, el presidente Ernesto Samper se tuvo que enfrentar a la desconfianza abierta de los Estados Unidos y de una gran parte de las élites colombianas y se vio obligado a reducir su actividad a la supervivencia del día a día. Las fuerzas armadas jugaron a la espera ante la incertidumbre política. En síntesis, las FARC tenían buenas razones para pensar que la ofensiva militar podía llevarlas a las puertas del poder, si la crisis política se prolongaba.

En 1998 esta ofensiva, sin embargo, comienza a dar signos de agotamiento. La apertura de un proceso de negociación con el gobierno de Andrés Pastrana no es precisamente la causa, ya que las FARC creían que podían sacar provecho de él para ampliar sus posiciones. La razón del agotamiento es, sobre todo, como veremos más adelante, el comienzo simultáneo de la modernización de las fuerzas armadas y de la contraofensiva paramilitar.

La renuncia de las FARC a las operaciones militares de envergadura no significa, sin embargo, que no continúen con su ofensiva bajo otras modalidades. Durante esta época hacen sentir su acción en más de la mitad del territorio colombiano y se asignan tres objetivos adicionales específicos: afectar la economía con el sabotaje de las infraestructuras, crear «zonas liberadas» y rodear las ciudades para implantarse en ellas.

El ELN participa tanto como las FARC en los sabotajes. Estos últimos están orientados sobre todo a los oleoductos, a las centrales hidroeléctricas y a la red de transporte de energía y, por intermedio de los secuestros, a la producción agrícola. Estos sabotajes, sin embargo, perturban más a las poblaciones locales que al conjunto del país ya que, en términos generales, su impacto sobre la evolución del PIB es relativamente limitado. El hecho puede asombrar si tenemos en cuenta los medios de que disponen en ese momento las guerrillas. Algunos analistas ven en esta moderación de sus acciones la prueba de que tratan de no destruir los recursos que contribuyen a su financiación<sup>37</sup> y, entre ellos, hay quien llegue a la conclusión de que se ha entrado en la fase de un «sistema de guerra» autosostenida y duradera<sup>38</sup>. Se trata de hipótesis cuya validez está por demostrar.

La formación de «zonas liberadas» se produjo sobre todo en las regiones de colonización y de cultivo de coca donde los grupos armados ejercían su dominio desde hacía largo tiempo, como los departamentos de Caquetá y Putumayo, las regiones fronterizas con Brasil o el departamento de Arauca que linda con Venezuela. Se trataba, en estos casos, de eliminar todas las huellas de las instituciones legales y de los políticos «tradicionales». Los 42.000 km<sup>2</sup> de la zona desmilitarizada en 1998 en el marco del proceso de negociación con el gobierno de Andrés Pastrana, situadas sobre todo en Meta y Caquetá, se inscriben en esta estrategia: las FARC obligan a algunos representantes de la administración de justicia y a los «notables» locales a hacer sus maletas. De 1998 a 2003, hacen lo mismo en otras zonas: se esfuerzan por controlar a los electores en el momento de las elecciones o de impedirles participar; amenazan, secuestran o asesinan a los candidatos y a los elegidos que no les convienen. En 2002, las cifras son las siguientes: 12 alcaldes y 60 concejales municipales son asesinados, 309 alcaldes demandan ser relevados de sus funciones, 300 se tienen que refugiar en las guarniciones militares o en las grandes ciudades desde donde deben manejar su administración a distancia, 600 concejales municipales (sobre un total de 1200) son objeto de amenazas, 1800 renuncian. 172 municipios se encuentran sin presencia policial. Un miembro del Secretariado de las FARC declara en ese momento que en el sur del país, una «Estado en formación» se había organizado. Efectivamente, las FARC ejercen en esas zonas una autoridad de hecho. Sin embargo, aunque pueda parecer sorprendente, no intentan construir allí las bases de una sociedad alternativa de tipo socialista ni de instalar los equipos

<sup>37</sup> SALAZAR, B y Castillo, María del Pilar, *La hora de los dinosaurios, Conflicto y depredación en Colombia*, Cali, CEREC-CIDSE, 2001.

<sup>38</sup> RICHANI, N, *Sistemas de guerra, La economía política del conflicto en Colombia*, Bogotá, IEPRI, 2003.

y la infraestructura que hacen falta<sup>39</sup>, ya que consideran que sería prematuro en una coyuntura de guerra.

Otro objetivo es tomar el control de las ciudades. Aunque la visión «campesinista» permanece, las FARC son perfectamente conscientes de que la salida del conflicto pasa primordialmente por las ciudades. A partir de 1995, sus operaciones obedecen ampliamente a esta consideración. El plan es garantizar el control del acceso: Bogotá, la capital, constituye el primer objetivo. Instalados décadas atrás en la cordillera oriental de los Andes cuyas estribaciones llegan incluso hasta la periferia oriental y norte de la capital, las FARC se establecen igualmente en la parte de Cundinamarca que constituye el acceso por el oeste a la metrópoli. Proceden de igual manera alrededor de Medellín y de algunas otras ciudades. De manera complementaria organizan milicias urbanas, las llamadas «milicias bolivarianas», reclutadas entre los jóvenes de los barrios menos favorecidos. La presencia de estas milicias es a menudo bien acogida al principio por los habitantes que ven en ellas una protección contra las bandas de delincuentes. Este es el caso de Medellín donde las milicias expulsan de las comunas a los sicarios vinculados con los carteles de la droga. Estas milicias ofrecen a la guerrilla posibilidades de infiltración menos detectables, a pesar de que son menos disciplinadas. Por lo demás, en 2001-2002, las FARC no dudan en infiltrar guerrilleros en algunos barrios de Medellín -la Comuna 13- y de Bogotá.

Los éxitos militares, los avances territoriales, la multiplicación de las «milicias urbanas»: todos estos factores contribuyen a alimentar el optimismo de los dirigentes de las FARC y a facilitar el reclutamiento de combatientes. Sus efectivos parecen alcanzar el número de 17.000.

Los resultados obtenidos deben sin embargo mucho al estado de debilidad en el que se encontraban las fuerzas armadas. La tradición civilista de Colombia ha contribuido a que las élites sólo se hayan preocupado a distancia de las cuestiones de seguridad. Las carencias de las fuerzas armadas en todos los campos eran patentes. Hasta 1994, la parte del presupuesto consagrada al ejército y a la policía apenas si sobrepasaba el 14% y sólo representaba el 2.68% del PIB<sup>40</sup>: un porcentaje de los más bajos de América Latina, más aún tratándose de un país afectado por una violencia tan fuerte. La fuerza pública sólo disponía de algunos helicópteros, cerca de treinta en estado de buen funcionamiento y, además, no adaptados al nuevo carácter del conflicto. Las tropas estaban compuestas por conscriptos salidos de los medios más desfavorecidos, desprovistos de entrenamiento, mantenidos en condiciones precarias y a menudo objeto de malos tratamientos. El espíritu burocrático prevalecía entre los oficiales, a menudo poco motivados y poco inclinados a asumir riesgos que pudieran afectar su promoción. La coordinación entre las diferentes armas era completamente nula al igual que la capacidad de recoger información. Los casos de corrupción no eran excepcionales al igual que los de violación de los derechos humanos. Estados Unidos había llegado incluso a exigir la supresión de algunos batallones implicados en estos abusos y, durante el gobierno Samper, prefirieron apostar a la modernización de la policía.

En 1998 el avance impresionante de las FARC impone un giro. A pesar del proceso de negociación, el gobierno de Pastrana se compromete con la modernización de las fuerzas armadas. Dos años después se adopta el «Plan Colombia», financiado conjuntamente por Estados Unidos y Colombia. La ayuda norteamericana es de hecho muy considerable. Durante los cinco años siguientes, Colombia recibe una ayuda providencial de 5.000 millones de dólares, que la convierte en el tercer país receptor de la ayuda norteamericana, después de Israel y Egipto. Estos créditos están reservados inicialmente a la financiación de las campañas de destrucción de los cultivos de droga. No obstante, desde 2002 Estados Unidos acepta que militares norteamericanos participen en la protección de los oleoductos y que cuatrocientos, y luego ochocientos «consejeros», se establezcan en Colombia. El Ejército colom-

<sup>39</sup> Las FARC construyen igualmente algunas rutas y pistas aéreas, pero para responder a sus propias necesidades logísticas.

<sup>40</sup> Cf GRANADA Camilo, «La evolución del gasto en seguridad y defensa en Colombia, 1950-1994», en M Deas y M.V. Llorente (editores) *Reconocer la guerra para construir la paz* Bogotá Norma, 1999, p. 537-598.

biano se beneficia de los medios de observación y de los helicópteros que sirven a la destrucción de los cultivos.

Por su lado, el gobierno procede a un aumento rápido del presupuesto de la fuerza pública, que se dobla durante el gobierno de Pastrana y su crecimiento continúa durante el primer mandato de Uribe hasta alcanzar el porcentaje muy elevado de 6.3% del PIB en 2007. Los efectivos aumentan paralelamente pero, sobre todo, la parte de los soldados profesionales. Se crean brigadas móviles y se organizan batallones de alta montaña, el número de patrullas fluviales se multiplica y su equipo mejora. Las fuerzas armadas adquieren numerosos helicópteros, entre ellos helicópteros de ataque Black Hawks y, en 2007, se dotan de Súper-Tucanos, aviones de ataque ligeros construidos en Brasil; reciben, igualmente, aviones telecontrolados y medios de vigilancia aérea. Finalmente, a partir de 2005, la coordinación de las operaciones y la información mejoran. Todo eso significa que los militares pueden reaccionar mucho más rápido a las acciones de la guerrilla.

Desde mediados de 1998, las FARC comienzan a sentir el impacto de esta modernización y a experimentar graves pérdidas como consecuencia de unas operaciones que todavía comprometían a centenares de guerrilleros y que eran detectadas. Y se vieron así obligadas a volver a las tácticas habituales de guerrilla. No disponen de un armamento que les permita hacer frente a los ataques aéreos, como por ejemplo misiles tierra aire. A partir de 2003, el Ejército comienza a aflojar la tenaza que las FARC habían construido alrededor de las ciudades, desalojándolas de Cundinamarca en las inmediaciones de Bogotá y de sus posiciones en los alrededores de Medellín; toma posesión de los barrios en los que los guerrilleros se habían infiltrado y destruye una gran parte de las organizaciones de milicianos, en los dos casos con el concurso de los paramilitares. En el período siguiente, comienza a atacar ciertos bastiones históricos de las FARC y lanza un plan, llamado «Plan Patriota», para alcanzar sus zonas de refugio. En el marco del programa de «Seguridad Democrática», el gobierno Uribe garantiza la seguridad de las carreteras más importantes y establece o restablece los puestos de policía en todos los municipios, lo cual no impide que en 2005 las FARC promuevan todavía numerosas acciones.

La mejora en la eficacia de las fuerzas armadas está lejos de explicar por sí misma las dificultades de las FARC, que provienen sobre todo de la intervención de las organizaciones paramilitares. No es éste el lugar para describir con detalle este aspecto y nos limitaremos a un breve resumen. A partir de 1994, los grupos paramilitares emprenden la recuperación a sangre y fuego de numerosas regiones. Urabá, región eminentemente estratégica puesto que comunica con los dos océanos y con Panamá, es la primera que cae. Después viene el Valle del Magdalena Medio: la toma de Barrancabermeja a finales de 1999, centro de la refinera petrolera, marcada por una larga historia del sindicalismo radical y por el dominio de las FARC y del ELN, constituye un giro decisivo. Después viene el turno de muchas otras zonas. Ya se ha mencionado la lucha por el control de los cultivos de coca. En 2006-2007, la presencia de los grupos paramilitares se extiende a casi todo el país, incluyendo la región amazónica que estaba dominada por las FARC.

Estos grupos jamás estuvieron verdaderamente unificados. Algunos de ellos, bajo el mando de Carlos Castaño, uno de los autores de la recuperación de Urabá y de Córdoba, pretendían mostrar un mínimo de coordinación y se presentaban como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el propósito de aparecer como una organización militar y política de contraguerrilla. De hecho, de esta manera logran captar más fácilmente el apoyo de sectores que, por haber organizado por su propia cuenta mecanismos de autodefensa frente a las guerrillas, estaban dispuestos a apoyar una organización más ofensiva. Sin embargo, la exasperación con respecto a los abusos de la guerrilla era tan extendida que el apoyo se extendió más allá del mundo de los propietarios.

No obstante, la fachada unitaria rápidamente se agrietó. La diversidad de situaciones regionales era demasiado grande para hacer posible una convergencia duradera, sobre todo debido a la diversidad de las relaciones con los narcotraficantes. El crecimiento de todos los grupos paramilitares fue financiado desde el comienzo por el narcotráfico: el mismo Carlos Castaño, vinculado desde antes con el cartel de Medellín, reconocía desde 2000 que el narcotráfico suministraba el 70% de la financiación

de las AUC. Pero la red de traficantes propiamente dicha pronto tomó el control de la mayor parte de los «bloques» paramilitares. Esta situación no se interrumpe en 2003 cuando el gobierno Uribe emprende la tarea de negociar la movilización de esos «bloques» ofreciéndoles, a través de la “Ley de Justicia y Paz», la promesa de penas reducidas. Una buena parte de las grandes redes de narcotraficantes, que habían permanecido hasta ese momento a distancia del paramilitarismo, se convierten a él con el fin de beneficiarse de estas medidas. Además, los paramilitares habían logrado apropiarse de las instituciones regionales en varias partes del territorio, sobre todo en la mayoría de los departamentos del Atlántico y habían obtenido un porcentaje importante de los escaños en el Congreso Nacional – varios ya están en la cárcel y muchos más están procesados- y una presencia no menos importante en los partidos que apoyan la política de Uribe.

Desde el punto de vista militar, los paramilitares nunca fueron capaces de enfrentarse con las FARC. Raras han sido las operaciones en las que lo han hecho directamente. Su superioridad sobre las FARC proviene de dos recursos.

En primer lugar, los paramilitares se situaron en las fronteras ambiguas de la ilegalidad y la legalidad; dispusieron de la tolerancia e, incluso, del apoyo activo de numerosas unidades militares y policivas satisfechas de disponer así de la fuerza de apoyo de la que tenían necesidad para hacer el “trabajo sucio”: ejecuciones sumarias, información, etc. A esta colusión con las fuerzas armadas se agregaba en numerosos departamentos atlánticos el apoyo de las autoridades regionales elegidas. Todo eso no era más que el prelude de la metamorfosis directa de los paramilitares en autoridades regionales y de su penetración en el Congreso nacional.

En segundo lugar y, sobre todo, los paramilitares no se limitaron al “trabajo sucio”, sino que convirtieron el terror en táctica de guerra y lo llevaron mucho más lejos que las FARC hasta el punto de que son responsables de la mayor parte de las masacres colectivas y de las atrocidades, que recuerdan la época de la *Violencia*, y de que practicaron una forma de “depuración política” a través de los “desplazamientos forzados” masivos: recordemos que el número de desplazados se estima en dos o tres millones, lo que hace de Colombia uno de los países más afectados por este fenómeno. Aunque las FARC tienen allí su parte, la responsabilidad de los paramilitares y de sus aliados es muy superior a este respecto.

Bajo la acción conjunta de militares y de paramilitares se produjo a partir de 2003 un innegable repliegue territorial de las FARC. Las destrucciones de pueblos y las “pescas milagrosas” en las carreteras se volvieron cada vez más raras. La mayor parte de las milicias urbanas se pasaron del lado de los paramilitares; su principal unidad de élite, la columna móvil “Teófilo Forero” se debilitó enormemente. Los efectivos disminuyeron: una cifra entre 8.000 y 10000 es hasta el momento la más citada por lo general. Las FARC sufrieron importantes pérdidas de combatientes: 2300 de 1998 a 2001, 5400 de 2002 a 2005 según las fuentes oficiales<sup>41</sup>. Las desertiones han ido en aumento. Según las mismas fuentes alcanzan más de mil en el año 2006 y un cantidad todavía mayor en 2007. Ya los desertores no se reclutan solo entre los combatientes recientes sino también entre los guerrilleros que llevan diez años o más en la guerra.

Sin embargo, hasta los años 2007-2008 las FARC se podían vanagloriar de haber hecho fracasar el plan de los militares orientado a matar o a capturar comandantes importantes, incluso a miembros del Secretariado. Esta no es la situación desde hace algunos meses. Varios comandantes de primer plano han sido eliminados, entre ellos el «Negro Acacio», uno de los hombres clave del tráfico de la droga y «Martín Caballero», que durante un largo tiempo había establecido su dominio en los Montes de María. En marzo de 2008, las FARC sufren dos golpes de un alcance aún mucho mayor puesto que, por primera vez, dos miembros del Secretariado son eliminados. La muerte de Raúl Reyes en territorio

<sup>41</sup> Cifras del Observatorio para la Paz. Es necesario resaltar que las pérdidas de las fuerzas del orden oscilan entre 1995 y 2002 en seiscientos u ochocientos hombres por año. La relación aproximada de uno a dos entre las pérdidas de las fuerzas del orden y las de las guerrillas ilustra la capacidad de estas últimas.

ecuatoriano los priva de quien manejaba los contactos internacionales y, según parece, garantizaba el vínculo entre el ala más militarista y el ala más política. La muerte de Iván Ríos, asesinado por uno de sus subordinados, revela la tendencia al desmoronamiento de ciertos frentes.

Todo esto contribuye significativamente a acentuar la desmoralización de una organización que, durante quince años, había apostado todo a la estrategia militar hasta el punto de descuidar la acción política y de ver que su credibilidad en este campo se reducía cada vez más.

El balance de la «guerra contra las drogas», impulsada en el marco del «Plan Colombia» es, por su parte, muy decepcionante. En siete años, la superficie de los cultivos de coca disminuye sin lugar a dudas: de más de 200.000 ha, pasa a menos de 80.000 ha. Pero su dispersión los hace menos vulnerables y el crecimiento de los rendimientos hace que la producción siga siendo casi idéntica.

Es cierto que, en contrapartida, el «Plan Colombia» ha sido el punto de partida de una modificación de las relaciones de fuerza en el terreno entre la guerrilla y las fuerzas coaligadas para hacerle frente.

## 6. LOS RECURSOS POLÍTICOS: LA ORTODOXIA COMUNISTA

El hecho de que las FARC presenten desde finales de los años 1980 la tendencia a relegar a un segundo plano la elaboración de una estrategia propiamente política y a eludir los debates internos a este respecto es uno de los factores, tal vez el principal, que más ha contribuido al mantenimiento de su cohesión. Aunque constantemente han asegurado que su objetivo final es la «toma del poder», se han cuidado casi siempre de precisar lo que harían de ese poder y las alianzas políticas que establecerían si lograran conquistarlo. Y mucho menos, como hemos visto, han pretendido innovar en el dominio ideológico y plantearse como «modelo» para otros movimientos revolucionarios. La ortodoxia comunista anterior a la caída de la cortina de hierro les ha sido suficiente como doctrina. Los riesgos de las escisiones «teóricas» han sido suprimidos de esta manera.

Su líder legendario, Manuel Marulanda Vélez, nunca ha jugado al papel de teórico revolucionario ni de guía inspirado y carismático. Más bien ha contribuido a imponer la visión «campesinista» entre sus allegados<sup>42</sup>. Durante muchos años, por lo demás, compartió la dirección de las FARC con Jacobo Arenas quien, formado al contacto con el sindicalismo petrolero de Barrancabermeja, posaba gustoso de teórico. Sin embargo, sus raros escritos son más una muestra de análisis de la coyuntura o de definición de la estrategia de guerra que de creación doctrinal. Después de su muerte en 1990, el relevo de Arenas no se ha llevado a cabo. En el Secretariado de las FARC, Raúl Reyes y el «Mono Jojoy» (Jorge Briceño Suárez), la principal figura militar, se han vanagloriado más bien de su desprecio por los «intelectuales». Una vulgata marxista-leninista y la historia de los orígenes de las FARC, en forma de relato mítico, les han parecido suficientes para justificar su acción.

Hasta mediados de los años 1980, las FARC, de todas maneras, no se han preocupado por fijar ellas mismas una línea política. Como ya se ha mencionado, se habían subordinado explícitamente al Partido Comunista colombiano y este hecho los había colocado en la posición de tener que seguir las orientaciones del Partido Comunista de la URSS. Gilberto Vieira, su secretario general de 1947 a 1991, un abogado formado en la escuela de la Guerra Fría, nunca estuvo dispuesto a dejarse seducir por la fantasmagoría guevarista o maoísta. El Partido defendía abiertamente la lucha armada, pero medía su influencia con relación al número de huelgas y a los resultados electorales, y no al de las acciones de la guerrilla.

El equilibrio entre el Partido y la guerrilla comienza a invertirse a comienzos de los años 1980 con la decisión de las FARC en 1982-1983 de doblar el número de sus frentes. Al aceptar en 1984 el cese al fuego y la apertura de negociaciones con el gobierno de Belisario Betancur, dan la sensación de querer transformarse en actor político y, al año siguiente, dan un paso más en esta dirección al asociarse al

<sup>42</sup> Algunos opúsculos que han aparecido con su firma, se refieren sobre todo a los años 1950 y la resistencia en la época de la Violencia. La dimensión «campesinista» se encuentra allí presente por todas partes.

Partido Comunista para crear un partido, la Unión Patriótica (UP), que busca atraer otras corrientes de la izquierda. Varios comandantes de las FARC ocupan puestos importantes en esta organización. La Unión Patriótica gana las alcaldías de 25 municipios en las elecciones regionales de 1986 y obtiene unos resultados muy superiores a los alcanzados habitualmente por el Partido Comunista, hasta el punto de que parece estar así en capacidad de aumentar su influencia territorial aprovechando el proceso de descentralización inaugurado por la reforma política de 1985, que establece la elección de alcaldes, en lugar del nombramiento hecho por los gobernadores<sup>43</sup>.

La historia de la Unión Patriótica termina sin embargo en tragedia. En algunos años, la mayor parte de sus dirigentes son asesinados: sus dos primeros presidentes (casi todos elegidos al Congreso), y la mayor parte de sus elegidos locales. Un gran número de sus simpatizantes, en particular los sindicalistas, conocen la misma suerte. Según fuentes oficiales, al menos 2500 miembros fueron víctimas de esta sangría. El Partido Comunista fue particularmente afectado. De un solo golpe, la afirmación de las FARC parecía justificada: la vía legal es una ilusión puesto que las élites colombianas están dispuestas a todo menos a aceptar un cambio, por pequeño que sea. De hecho, preocupados por el proceso de negociación impulsado por Belisario Betancur y por los resultados electorales obtenidos por un partido que les parece una simple cobertura de las FARC, los narcotraficantes, los políticos locales, los paramilitares, los miembros de las fuerzas del orden, los propietarios terratenientes se coaligan para eliminar al nuevo partido.

¿La creación de la Unión Patriótica significaba verdaderamente una adhesión a la vía política? Muchos índices sugieren que se trataba más bien de una versión actualizada de la “combinación de todas las formas de lucha”. Jacobo Arenas, que había considerado en algún momento la posibilidad de lanzarse como candidato por este partido, publicó un libro donde afirmaba que la UP no era más que un instrumento destinado a dar impulso a la conquista del poder por las armas (J. Arenas, 1985). Durante el cese al fuego, las FARC continuaron su expansión y, desde 1987 vuelven a las emboscadas contra la fuerza pública. La UP se ponía muy a menudo al servicio del reclutamiento de combatientes en los medios urbanos. Tensiones cada vez más vivas surgieron rápidamente entre los cuadros de la guerrilla y los integrantes de ese partido que creían en las posibilidades de una oposición propiamente política al régimen. Entre los supervivientes algunos se reintegraron a la guerrilla; otros, que consideraban haber sido utilizados, tomaron distancia con el Partido Comunista.

Un último episodio contribuye a que las FARC digan adiós a la política<sup>44</sup>: la ocupación por el ejército en noviembre de 1989 de “Casa Verde”, la sede del Secretariado en La Uribe desde hacía 10 años. Esta sedentariedad favorecía los contactos. Llevada a cabo el día mismo de la elección de la Constituyente, la operación militar da un buen motivo a las FARC para rechazar, contrariamente al M-19 y al EPL, la negociación de una eventual participación en esta Asamblea. A manera de respuesta, lanzan su primera ofensiva de envergadura y adoptan una táctica de mayor movilidad y dispersión.

Aunque la opción por la vía militar no excluye el proyecto político, éste último se puede resumir en la esperanza de una “insurrección popular” a la manera salvadoreña. Ya en 1985 Jacobo Arenas evocaba esa posibilidad. El exterminio de la Unión Patriótica le parece ofrecer las condiciones para provocar la reacción que daría la señal. A partir de allí, cada manifestación de protesta popular, cada huelga, cada crisis política hacía renacer la esperanza en una sublevación general. Ocurre lo mismo cuando se produce en 1998-1999 una recesión económica que conlleva una caída del nivel de vida de las clases populares sin precedente desde 1929. La organización de las milicias bolivarianas y, poco después, de un movimiento clandestino bolivariano en 1997, y de manera más reciente de un PCCC (Partido Comunista Clandestino de Colombia), han estado orientados a favorecer su preparación.

<sup>43</sup> SÁNCHEZ F. y Chacón M., «Conflicto, Estado y Descentralización: del progreso social a la disputa armada por el control local, 1974-2002», en Gutiérrez F, Wills M.E. y Sánchez Gómez G. (ed.), *Nuestra guerra sin nombre: transformaciones del conflicto en Colombia*, Bogotá, Norma, 2006.

<sup>44</sup> VALENCIA, L., *Adiós a la política, bienvenida a la guerra. Secretos de un malogrado proceso de paz*, Bogotá, Intermedio, 2002.

Las FARC sin embargo siempre han buscado ejercer una hegemonía sobre el conjunto de las guerrillas y sobre las fuerzas políticas opuestas al régimen.

Antes de 1990, cuando aún existían otras tres importantes organizaciones de guerrilla (el ELN, el EPL y el M-19), las FARC afirmaban de manera permanente su supremacía. En 1987 una coordinación entre estas organizaciones fue creada con el nombre de Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Nunca funcionó verdaderamente debido a las pretensiones de las FARC de dominarla. Cuando el EPL se desmovilizó en 1991 en Urabá, las FARC persiguieron despiadadamente a sus antiguos miembros, hasta el punto incluso de arrojarlos en los brazos de los paramilitares. Sólo las FARC y el ELN continuaron en el combate, pero las fricciones entre estos grupos no cesaron. El debilitamiento militar del ELN, como consecuencia de la acción de los paramilitares, deja a las FARC el cuasi monopolio de la estrategia de guerra. En estos últimos años el ELN se comprometió en un proceso de negociación con el gobierno de Uribe que, aunque no ha dado resultados hasta ahora, ha sido aprovechado por las FARC para tomar el control de numerosos núcleos de la organización rival y para desencadenar contra ella una lucha a muerte que habría hecho cerca de mil muertos en regiones como Arauca y Nariño<sup>45</sup>.

En el plano político las FARC igualmente han querido someter todas las fuerzas de oposición al régimen; rechazan incluso la idea misma de «sociedad civil», que pretenden encarnar bajo la forma de «sociedad civil en armas». Este rechazo es paradójico porque una parte de la sociedad civil «organizada» no disimulaba en muchas ocasiones su simpatía con la lucha armada. Al utilizar a la Unión Patriótica, contribuyeron a su suerte trágica y aún siguen desconfiando de todas las organizaciones de izquierda que pretendan emanciparse de su tutela. Las FARC no disimulan su hostilidad con respecto a Lucho Garzón, antiguo sindicalista comunista que se convirtió en alcalde de Bogotá entre 2003 y 2007 con un programa socialdemócrata, ni con respecto al ala reformista del «Polo Democrático», el partido que reagrupa a la izquierda desde hace seis años.

Sin embargo las FARC tuvieron dos ocasiones para asumir un lenguaje político y presentar en la escena política las perspectivas que le ofrecían al país. La primera es el proceso de negociación emprendido en 1982 por el gobierno de Belisario Betancur. La segunda es el proceso de negociación llevado a cabo entre 1998 y 2002 por el gobierno de Andrés Pastrana. En los dos casos, los gobiernos hicieron al principio múltiples gestos de buena voluntad. En los dos casos, igualmente, una parte importante de la opinión soñaba con un acuerdo. La responsabilidad del fracaso no incumbe solamente a las FARC: en el primer caso, la liquidación de la Unión Patriótica y en el segundo la expansión paramilitar, prueban que fuerzas poderosas estaban resueltas a bloquear toda aproximación de las posiciones. Además, las FARC se mostraron incapaces de aprovechar la tribuna de que disponían para hacer proposiciones plausibles y para sostener un discurso o hacer gestos que les valiera una mayor simpatía de la opinión. En el momento de la inauguración oficial de las negociaciones en 1999 en San Vicente del Caguán, en el corazón de la zona desmilitarizada de 42.000 km<sup>2</sup> que Andrés Pastrana les había otorgado, Manuel Marulanda se abstuvo de ocupar la silla que le había sido reservada al lado de la del Presidente y la negociación nunca despegó verdaderamente. A San Vicente del Caguán, durante la negociación, representantes de las élites colombianas fueron a encontrarse con los dirigentes de las guerrillas en el cuadro de las “mesas temáticas”, al igual que representantes de la sociedad civil fueron a expresar sus aspiraciones durante las audiencias públicas: las FARC se comportaron como si se tratara de un congreso del partido en la antigua Unión Soviética.

[47]

<sup>45</sup> En una carta del 6 de diciembre de 2005 al comandante del ELN, Manuel Marulanda deplora que los malentendidos entre las dos organizaciones se manifiesten en el campo de las finanzas, la organización de masas, la compra de armas a precios exorbitantes, el sector territorial, los desplazamientos a la vista con perjuicio para las masas, la siembra de minas en todas partes [...], la sindicación de personas y su posterior ejecución, el hurto de ganados a campesinos en sus áreas, la retención de amigos y de vehículos [...] los cobros de impuestos por ambas organizaciones a una misma persona» etc.

En varias ocasiones, desaprovecharon también la vocación que se les ofreció de dialogar con interlocutores exteriores. En 1999, después de que un alto responsable de la administración de los Estados Unidos acabara de establecer contacto con ellas en Costa Rica, asesinaron tres indigenistas americanos, lo que condujo a la interrupción de las conversaciones. En enero de 2002, cuando la negociación con Andrés Pastrana estaba al borde de la ruptura, embajadores europeos se esforzaron vanamente por renovarlas; pero, inmediatamente después de la ruptura, las FARC no vacilaron en hacer una afrenta con el secuestro de la franco colombiana Ingrid Betancur.

No es pues sorprendente que estas dos negociaciones se hayan terminado con la acentuación de su descrédito. Su incapacidad para manejar la palabra política aparece a plena luz. En 1986, las clases medias se separan de ellas; en 2002, la mayoría del país, como lo demuestra la adhesión masiva a la candidatura de Álvaro Uribe, partidario de la “mano dura” contra las guerrillas. En una y otra ocasión, la opinión imputa el fracaso de las conversaciones únicamente a la guerrilla. Las FARC, pues, sin duda han sacado de estas experiencias otra lección: son ellas las que salen perdiendo cuando tratan de comprometerse, incluso parcialmente, con los manejos políticos.

Catalogadas como “organización terrorista” por Estados Unidos después del 11 de septiembre y, posteriormente, por la Unión Europea, se encuentran ahora privadas de relaciones oficiales con el exterior.

El aislamiento no parece inquietarlas demasiado. Si damos fe a los sondeos de opinión nunca han contado, incluso en sus mejores momentos, con un porcentaje de opinión favorable, que ha oscilado entre el 3 y el 5%. La exasperación en su contra no es, en cambio, ajena al hecho de que desde hace cinco años, Álvaro Uribe ha logrado mantener un nivel de favorabilidad que fluctúa alrededor del 70%.

¿Las FARC, implicadas como efectivamente lo están en el tráfico de drogas y en muchos otros tráficós, entre ellos el de seres humanos por intermedio de los secuestros, siguen siendo una organización política revolucionaria? No es seguro que la pregunta tenga un sentido. En todo caso, recordar que se han asignado siempre por objetivo la “toma del poder” constituye una respuesta insuficiente. Hace mucho tiempo que la calificación de una organización ilegal como “política” ya no pasa en Colombia por el enunciado de una intención explícita con la sociedad y por la construcción de una ideología que le sirva de soporte. En el marco de un conflicto tan complejo, dominio territorial y manejo del terror son los sustitutos del lenguaje político: lo que se quiere remite a lo que se hace. Sólo cuentan las “vías de hecho”. En la medida en que esas vías de hecho sean lo suficientemente espectaculares, es decir, en la medida en que lleguen a ser atroces, pueden dar acceso a un reconocimiento de la calidad de actor “político”. Las guerrillas tienen desde hace muchos años el saber práctico acerca de todo esto. Con el impulso en 2001-2002 de los “secuestros políticos” y con el tratamiento inhumano que infringen a las víctimas, se dotan de un medio para forzar su regreso a la escena política llegado el momento. Los grupos paramilitares y de narcotraficantes lo hacen mejor aún: aunque poco habían soñado con la posibilidad de “hacer política”, descubrieron en el año 2000 que el incremento de las masacres y de los desplazamientos forzados les abría el camino hacia el reconocimiento implícito de la condición de actor político.

## CONCLUSIÓN

Hay que volver al punto de partida. He hablado de ethos campesinista. Muchos comentaristas han visto en el reclutamiento fundamentalmente rural de las FARC la fuente de la temporalidad lenta en la que se inscribe su acción. Varios gobernantes, uno tras otro, han organizado políticas alternativas de conciliación o de enfrentamiento; algunos han llevado a cabo reformas políticas de envergadura como las que aparecen en el texto de la Constitución de 1991; pero siempre se han encontrado frente a la misma organización que parece hacer de la paciencia una estrategia, como si estuvieran esperando que las instituciones y las estructuras sociales se desintegren por sí mismas.

Sin embargo, no es cierto que la temporalidad campesina sea tan lenta como se pretende. En todo caso la temporalidad de las FARC es mucho más compleja de lo que parece en una primera mirada. El mundo campesino “tradicional” en el que encontraban su punto de apoyo se ha desintegrado am-

pliamente. La Unión Soviética, que durante largo tiempo sirvió de fundamento a una temporalidad del “progreso”, ha desaparecido y el Partido Comunista colombiano, por su parte, está prácticamente liquidado. Mientras tanto, la economía de la droga ha garantizado a las FARC los medios para su expansión pero también para la inserción en el universo internacional del tráfico de drogas y de armas: el tiempo de la globalización no les es ajeno. La práctica de los secuestros y de la extorsión a gran escala ha implicado una temporalidad más fragmentada y aleatoria que hace entrar a la guerrilla en la era del “presentismo”.

No obstante, la silueta inmóvil de Manuel Marulanda Vélez está siempre allí y con ella la sombra de otra época, porque la persistencia de las FARC debe mucho a las huellas de la *Violencia* de los años 1950. No se trata de que las FARC perpetúen el estilo de los núcleos de autodefensa campesina de este período: la droga y el potencial propiamente militar han modificado profundamente el carácter de la lucha guerrillera<sup>46</sup>. Pero la manera como Marulanda y sus próximos denuncian las injusticias lleva la marca de la humillación experimentada medio siglo antes por amplios sectores, principalmente rurales.

Cuando el 7 de enero de 1999 la voz de Marulanda<sup>47</sup> se levanta frente a una silla vacía y un auditorio compuesto por el Presidente de Colombia y los embajadores, invocando como punto de partida del conflicto que destroza a este país desde 1980 la destrucción de sus gallinas y de sus marranos en 1964 como consecuencia del bombardeo de Marquetalia<sup>48</sup>, nos encontramos frente a una dimensión central de lo político, que aparece allí a plena luz.

Esta dimensión no se limita a la demanda de una vasta reforma agraria, incluso si tenemos en cuenta que esta petición ha sido reiterada a lo largo de décadas<sup>49</sup>. A pesar de las transformaciones del paisaje agrario, esta demanda se ha mantenido ciertamente en forma casi inalterada haciendo las veces de carta de identidad política de la guerrilla<sup>50</sup>. Esta dimensión no remite tampoco únicamente a una relación con las instituciones así sea de rechazo radical: si las FARC hubieran sido una organización revolucionaria clásica hace largo tiempo que hubieran tenido que reconocer su fracaso. La dimensión política remite de hecho a un resentimiento anclado en una historia profunda en la que la *Violencia* es el punto de referencia principal: la guerra en la que los campesinos fueron actores a pesar de sí mismos y sobre la cual, una vez terminada, las elites impusieron el silencio. Pero, más allá de eso, un pasado global en el que muchos colombianos no tuvieron acceso a una ciudadanía de cualquier tipo que fuese.

Aquel día Marulanda, ausente pero omnipresente, triunfó. La referencia que hizo en aquella ocasión a las aves de corral expresa ciertamente una gran «malicia indígena» ya que es una manera de engañar al otro ofreciéndole una imagen de sí que corresponde a sus prejuicios pero que, al hacerlo, lo obliga a no pasar inadvertido. Pero esta referencia sirve sobre todo para formular un sentimiento de venganza, en primer lugar, contra la oligarquía, que debe darse cuenta de su poder y darle un

<sup>46</sup> En una entrevista dada en agosto de 2003 a la revista *Semana*, Plotter, uno de los cuadros de las FARC que han desertado, subraya que la moral no puede ser la misma cuando se trata de llevar a cabo acciones ofensivas que cuando se trata sobre todo de garantizar la vigilancia de los laboratorios de fabricación de cocaína. Aunque todos los frentes no están implicados en el narcotráfico, algunos se comportan como cualquier red de narcotraficantes.

<sup>47</sup> Recordemos que en el último instante Marulanda se excusó con el pretexto de tener razones de seguridad: su discurso fue leído por uno de los comandantes.

<sup>48</sup> La evocación de las gallinas y de los marranos da el tono a una gran parte del discurso. Muchos de los comentaristas han querido ver allí una costumbre campesina. Otros comentaristas anteriores habían creído detectar en las entrevistas en que Marulanda se refiere a las guerrillas liberales de 1952, con las que la guerrilla comunista había tenido vínculos, la huella de una nostalgia de su afección a este partido tradicional. En realidad, el líder de las FARC ha mostrado desde 1984, en diversas ocasiones, que desconfía mucho más de lo liberales que de los conservadores.

<sup>49</sup> Durante el desarrollo de las negociaciones con el gobierno de Pastrana, la exigencia de reforma agraria figura en primer lugar en el «Programa de diez puntos» sustentado por la guerrilla. El contenido de esta reforma recoge lo que aparece enunciado en el nacimiento de la organización: dar «la tierra en forma completamente gratuita a los campesinos que la trabajan o quieren trabajarla, sobre la base de la confiscación de la propiedad latifundista». Sin embargo, el perfil de los «campesinos» y del «latifundio» ha cambiado mucho entre un momento y otro.

<sup>50</sup> Durante el desarrollo de la Octava Conferencia en abril de 1993, las FARC retoman y actualizan el programa agrario que habían enunciado desde 1964.

«reconocimiento», conquistado en ardua lucha. Venganza, en segundo lugar, contra los voluntaristas izquierdistas y otros ideólogos de salón que lo habían considerado durante un largo período con condescendencia mientras ellos, por su parte, se integraban poco a poco al régimen. Revancha, finalmente, contra todos aquellos que no conocieron la humillación pero muchas veces han pretendido reclamar-se de ella para ponerla al servicio de su demagogia.

Sin embargo, las FARC no han tenido éxito cuando han contado con el acceso a una tribuna política para convertir su resentimiento en perspectiva política. A este respecto, parecen haberse dejado llevar por una especie de inercia. Y es tal vez en este aspecto que hay que dirigirse a Manuel Marulanda para tener una explicación. A los 79 años, es posible que se sienta satisfecho con la obra realizada. Se han conocido otros líderes revolucionarios legendarios que, al final de su reinado, han hecho del inmovilismo una virtud y, al prohibir cualquier tipo de deliberación entre sus allegados, han creído y han hecho creer que el monolitismo garantiza la perennidad de su obra.

Cuando se abra la sucesión, se verá más claramente cómo las FARC no podrán conservar su cohesión si no vuelven sobre una estrategia más claramente política, que no podría ser distinta a comprometerse en negociaciones, al menos parciales. El repliegue territorial que han sufrido, la pérdida de la moral de sus tropas, su aislamiento internacional, deberían llevarlas hasta este punto<sup>51</sup>. Disponen al menos de una ventaja que podría ayudarlas a este respecto: el hecho de compartir una visión «bolivariana» con su poderoso vecino Hugo Chávez y, por su mediación, con países vecinos.

Las FARC disponen también de un medio de presión para motivar una internacionalización del problema colombiano: los rehenes «políticos» que aún mantienen. En mayo de 2007, la muerte de 11 de estos rehenes, los diputados regionales del valle del Cauca, estuvo a punto de arruinar esta posibilidad. Al favorecer, a partir de diciembre de 2007, la liberación «unilateral» de algunos de estos rehenes por intermedio de Hugo Chávez, las FARC han dado una clara señal de su deseo de orientarse hacia una discusión política bajo la égida de diferentes países, Venezuela entre ellos, que tendrían el rol de «facilitadores». Sólo les queda dar un paso más: la liberación de Ingrid Betancur. El “Monsieur Marulanda”, con que Nicolás Sarkozy se dirigió al líder histórico de la guerrilla, muestra bien que esta liberación podría ser un preludio a una discusión política de este tipo. La preocupación humanitaria, evidentemente, no es lo que inspira a las FARC pero su interés político podría llevarlas a jugar en el mismo sentido.

Si esta reorientación se produjera no sería sin dificultad, ya que supone que Álvaro Uribe estimaría lo suficientemente disminuida la capacidad militar de las FARC para comprometerse en un nuevo proceso de negociación. La sombra de la justicia internacional pesa ahora sobre la resolución de los conflictos. La influencia del paramilitarismo se hace sentir por todas partes y las élites del país están menos dispuestas que nunca a reformas profundas.

Pero sobre todo el conflicto ha llegado a tal grado de degradación que muchos de los combatientes podrían verse tentados a distanciarse de una eventual reorientación política. Habitados a las prácticas de extorsión y secuestro, podrían fácilmente dirigirse hacia el bandidismo. La implicación en el tráfico de las drogas de muchos de ellos podría llevarlos a descubrir que finalmente tienen numerosos intereses comunes con los narcotraficantes y algunos paramilitares.

Lo que podría convencer a algunos dirigentes de las FARC de intentar una reorientación política es la conciencia de que la prolongación del inmovilismo ya no garantiza tampoco el mantenimiento de la cohesión de la guerrilla y se correría el riesgo, por el contrario, de llevar finalmente al derrumbamiento de la organización en su conjunto.

<sup>51</sup> La Fundación «Seguridad y Democracia» presenta en su informe de 2007 muchas indicaciones sobre la baja en la eficacia militar de las FARC. Durante los primeros 11 meses del año sólo realizaron 118 secuestros contra más de 900 en 2002. El número de los ataques contra la fuerza pública ha disminuido en 42% con relación a 2002. El número de sabotajes a la infraestructura llevados a cabo por las FARC y el ELN ha disminuido en este mismo lapso en 58%. Las FARC no lograron perturbar de manera importante el desarrollo de las elecciones locales de octubre de 2007. El balance global de la política de «Seguridad Democrática» no es menos considerable. El número de los homicidios a nivel nacional ha retrocedido en cinco años en 44%; en Medellín, en 85%, en Bogotá en 37%, en Cali en 36%.